



Universidad
de Alcalá

TÍTULO DEL TRABAJO

EL DELITO DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓN TERRORISTA

THE FELONY OF COOPERATION WITH TERRORIST ORGANIZATION

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado

Presentado por:

D. MIGUEL SÁNCHEZ MONTILLA

Dirigido por:

Dr. D. ESTEBAN MESTRE DELGADO

Alcalá de Henares, a 27 de enero de 2019

UAEH

TÍTULO DEL TRABAJO

EL DELITO DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓN TERRORISTA

THE FELONY OF COOPERATION WITH TERRORIST ORGANIZATION

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado

Presentado por:

D. MIGUEL SÁNCHEZ MONTILLA

Dirigido por:

Dr. D. ESTEBAN MESTRE DELGADO

Alcalá de Henares, a 27 de enero de 2019

ÍNDICE

PÁGINA

Resumen	1
Palabras clave.....	1
Abstract	1
Key words	2
I.- Introducción.....	2
1.- Objeto del trabajo	2
2.- Metodología seguida	3
II.- Terrorismo: concepto y naturaleza jurídica:	4
1.- El concepto de terrorismo en los instrumentos jurídicos internacionales	6
2.- El concepto de terrorismo en la legislación penal española.....	12
3.- El concepto de terrorismo en la jurisprudencia	14
III.- El terrorismo en España.	15
1.-Grupos terroristas de ideología nacionalista radical	16
2.- Grupos terroristas de ideología de extrema izquierda.....	19
3.- Grupos terroristas de ideología de extrema derecha	20
4.- Grupos terroristas yihadistas	20
IV.- Legislación antiterrorista en España	21
1.- La legislación antiterrorista durante la Dictadura franquista	22
2.- La legislación antiterrorista durante la transición política española	26
3.- La legislación antiterrorista en el Código Penal de 1995.....	34
V.- El delito de colaboración con organización terrorista.....	36
1.- Consideraciones generales	36
2.- Concepto y naturaleza jurídica.....	39
a) Delito autónomo	39
b) Delito de mera actividad	40
c) Delito de peligro abstracto.....	40
d) Delito subsidiario o residual.....	41
e) Delito de resultado cortado.....	41
f) Delito esporádico	41
g) Delito de estructura abierta	41
h) Delito doloso	42
VI.- Reforma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 2/2015 en relación con el delito de colaboración con organización terrorista (art. 577 CP).....	44
1.- Conducta tipificada	50
2.- Actos concretos	50
3.- Agravación	51
4.- Imprudencia.....	51

VII.- Elementos positivos del tipo	52
1.- Parte objetiva.....	52
a) Ejecución de actividades propias de la infraestructura material de la organización terrorista	53
b) Ejecución de actividades propias de la infraestructura organizativa de la organización terrorista.	53
c) Ejecución de actividades propias de la infraestructura informativa del grupo terrorista.....	54
d) Puesta a disposición de la organización terrorista los conocimientos técnicos y medios materiales que pueden ser utilizados por la misma para la consecución de sus fines	54
e) Realizar actividades que tengan por objetivo fortalecer la estructura delictiva de la organización terrorista	55
f) Prestar asistencia, ayuda, cobijo o cualesquiera otros servicios a los integrantes de la organización terrorista que proteja a los mismos de la persecución policial o la represión penal o contribuyan al desarrollo de sus actividades delictivas	55
g) Ejecución de actividades propias de la infraestructura financiera directa o indirecta de la organización o grupo terrorista	56
VIII.- Elementos negativos del tipo:	56
1.- Legítima defensa	57
2.- Estado de necesidad	57
3.- Miedo insuperable	57
4.- Cumplimiento de un deber, cargo u oficio	58
5.- Inexigibilidad de otra conducta	59
IX.- Iter criminis.....	59
1.- Actos preparatorios punibles	59
2.- Actos ejecutivos	60
X.- Penalidad.....	60
1.- Penas privativas de libertad.....	60
2.- Multas.....	61
3.- Medidas de seguridad.....	62
4.- Consecuencias accesorias.....	63
XI.- Conclusiones.....	63
Anexo	66
Índice cronológico de disposiciones citadas	92
Bibliografía consultada	93
Relación cronológica de sentencias analizadas	95
Documentos utilizados en soporte electrónico	97

ABREVIATURAS

BVE	Batallón Vasco Español
CP	Código Penal
EE. UU.	Estados Unidos de América
ECLI	European Case Law Identifier (Identificador europeo de jurisprudencia)
EGPGC	Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego Libre)
ÈPOCA	Ejército Popular Catalán
ERC	Esquerra Republicana de Catalunya
ETA	Euskadi ta Askatasuna (País Vasco y Libertad)
GAE	Grupos Armados Españoles
GAL	Grupo Antiterrorista de Liberación
DRAE	Diccionario de la Real Academia Española
DRIL	Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación
GRAPO	Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre
L.O.	Ley Orgánica
MPAIAC	Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario
OMLE	Organización de Marxistas Leninistas Españoles
PCE-r	Partido Comunista de España Reconstituido
ROJ	Repertorio Oficial de Jurisprudencia
SAN	Sentencia de la Audiencia Nacional
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TC	Tribunal Constitucional
TS	Tribunal Supremo

RESUMEN

El presente trabajo trata sobre los delitos de terrorismo, las principales organizaciones terroristas que han operado en España, y la legislación antiterrorista desde la dictadura, pasando por la transición, hasta la actualidad. De forma especial trato el delito de colaboración con organización terrorista tipificado en el artículo 577 del Código Penal. En él se subsumen las conductas favorecedoras de, los objetivos y fines de las organizaciones o grupos terroristas, realizadas de forma consciente y voluntaria por un—extraneus a la organización criminal. Para ello comienzo mi trabajo con la búsqueda del equívoco y controvertido concepto de terrorismo, analizándolo desde el punto de vista de la doctrina jurídica, su regulación en los instrumentos jurídicos internacionales, la legislación penal española y la jurisprudencia. La parte central del trabajo está dedicada al análisis del delito de cooperación con organización terrorista.

Asimismo analizo la tipificación de dicho delito, tras la reforma introducida por la L.O. 2/2015.

PALABRAS CLAVE

Colaboración con banda armada. Delito de terrorismo. Dolo. Grupo terrorista. Penalidad. Terrorismo.

ABSTRACT

The present report addresses the felony of terrorism, the main terrorist organizations that have operated in Spain and the legislation regarding terrorism since the dictatorship's times, until the present times. I am focusing in the specific felony of cooperation with terrorist organizations categorized in the 577 article of the Penal Code, which subsumes the acts, objectives and aims of terrorist organizations or groups carried out consciously and voluntarily by the extraneus. To that end, I commence this report by searching for the misinterpreted and controversial concept of terrorism, analyzing it from a legal doctrine's approach, it's regulation in the international legal tools, the spanish penal legislation and

jurisprudence. The main subject of this report is focused on the analysis of the felony of cooperation with terrorist organizations.

In addition, I analyse the regulation of said felony, after the reformation introduced by the L.O 2/2015.

KEY WORDS

Collaboration with a criminal organization. Penalty. Terrorism. Mens rea. Terrorist group. Terrorist offenses

I. INTRODUCCIÓN

El terrorismo es un fenómeno que ha preocupado a la sociedad española e internacional durante las últimas décadas, pues constituye una de las mayores agresiones a la paz, a la seguridad y a la estabilidad de las sociedades democráticas. Atentados perpetrados en septiembre de 2001 en EE. UU., marzo de 2004 en España, julio de 2005 en Londres, noviembre de 2015 en París, marzo de 2016 en Bruselas, así como una lista interminable de atentados terroristas en diferentes partes del mundo, han evidenciado que ningún ciudadano, ninguna institución, ni ningún Estado se encuentra libre de esta amenaza. En consecuencia, es obligado, por parte de los Estados democráticos, dar una respuesta proporcionada y coordinada a esta situación, para lo cual deben dotarse de los mecanismos jurídicos necesarios para luchar contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y prevenir la comisión de actuaciones terroristas, con todos los instrumentos que proporciona el Estado de Derecho, en un ámbito de máxima cooperación internacional.

1. Objeto del trabajo

En el presente Trabajo de Fin de Máster he abordado el estudio del delito de colaboración con organización, grupo o elemento terrorista tipificado en el artículo 577 del Código Penal español.

Los estudios de Derecho han despertado en mí el interés por el Derecho Penal y, debido a lo apretado del plan de estudios, el cual obliga a comprimir las asignaturas, he optado por ampliar mis conocimientos en esta rama del Derecho.

El motivo por el cual he decidido abordar este tema es por el creciente interés y preocupación que tienen en la actualidad los temas de terrorismo.

Nuestro país ha venido sufriendo desde la segunda mitad del siglo XX el azote del terrorismo, siendo los principales grupos de ideología nacionalista independentista (ETA, ÉPOCA, TERRA LLIURE, MPAIAC, EGPGC), sin olvidarnos de grupos de extrema izquierda (como GRAPO) o de extrema derecha. Por la acción de la Policía y de la Justicia, estos grupos han sido desarticulados, y sus miembros juzgados y condenados.

Con la tregua indefinida de las actividades terroristas acordada unilateralmente en el año 2010 por la organización terrorista ETA, el nivel de alerta en la población disminuyó, pero la creciente actividad terrorista yihadista que afecta a la comunidad internacional ha vuelto a hacer crecer la preocupación en la sociedad.

2. Metodología seguida

La metodología seguida para el desarrollo de este trabajo ha sido la lectura de diferentes libros de escritores de reconocido prestigio especializados en temas penales y de terrorismo, de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de terrorismo, y de La legislación penal española, y la búsqueda y estudio de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.

De esta manera, estudio cómo el legislador ha tipificado este delito en el Código Penal y cómo los tribunales españoles han resuelto los casos que se les han presentado.

El trabajo está estructurado en doce apartados sistemáticos independientes. El primero está dedicado a la introducción, el segundo al concepto de terrorismo y su naturaleza jurídica, analizándolo desde la perspectiva de los instrumentos jurídicos internacionales, la legislación penal española, la doctrina y la jurisprudencia. El tercer apartado está dedicado a los grupos terroristas que han actuado en España desde la dictadura hasta la actualidad. En el apartado cuarto se aborda la legislación antiterrorista en España desde la dictadura hasta la actualidad,

pasando por la transición a la democracia. Los ocho siguientes al estudio del delito concreto de colaboración con banda terrorista, y finalizo con las conclusiones obtenidas tras la realización de mi trabajo.

II. TERRORISMO: CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

El terrorismo es un fenómeno cotidiano que ha preocupado a la sociedad española en las últimas décadas. Como dice TERRADILLOS BASOCO¹, *“el terrorismo no es un fenómeno coyuntural, sino una forma de criminalidad incardinada en la cotidianidad y concebida por el poder como un elemento patológicamente estructural, al que no conviene hacer frente con elementos transitorios”*. En los últimos años esta preocupación ha ido decayendo como consecuencia del cese definitivo de la actividad armada declarado en el año 2011 por el grupo terrorista ETA, aunque la preocupación por la actividad terrorista de los grupos islamista ha ido in crescendo.

El presente trabajo versa sobre los delitos de colaboración con banda terrorista. Para poder determinar el ámbito objetivo de estos delitos debemos acotar el término *“terrorismo”*, tarea nada fácil pues, como indica LAMARCA PÉREZ², no existe un concepto unívoco y preciso del terrorismo. Como indica NUÑEZ CASTAÑO³, es fundamental determinar el concepto de terrorismo puesto que, al tratarse de una actividad violenta que provoca la muerte y destrucción, debe ser el Derecho Penal quien lo regule y por supuesto dentro de los parámetros del Estado de Derecho.

Como punto de partida utilizaremos la definición gramatical del término contenida en el (DRAE)⁴. El DRAE nos da tres acepciones: en la primera, «dominación por el terror»; en la segunda, «Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror»; y en la tercera acepción, «Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.»

¹ TERRADILLOS BASOCO, J. *Terrorismo y derecho*. Tecnos, Madrid 1988, pág.13

² Como afirma LAMARCA PÉREZ, “la cultura jurídica contemporánea carece de un concepto unívoco y preciso del terrorismo”. LAMARCA PÉREZ, C. *Tratamiento jurídico del terrorismo*, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, 1985, pág. 31.

³ NUÑEZ CASTAÑO, E., *Los delitos de colaboración con organizaciones y grupos terrorista*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013, pág. 71.

⁴ Diccionario de la Academia de la Lengua Española, Real Academia Española, Ed. 23ª [Madrid, 2014]

De esta definición podemos extraer que los actos de terrorismo son actos humanos criminales llevados a cabo por bandas organizadas cuya finalidad es infundir terror y alarma social, con finalidad política. Ahora debemos encontrar una definición jurídico penal de terrorismo.

Son muchos los autores que han dado una definición al fenómeno terrorista. Para JIMENEZ DE ASÚA⁵, el delito de terrorismo no constituye una figura homogénea ni caracterizada por fines altruistas ulteriores, sino por el medio ocasionado, por la víctima, que puede ser cualquier persona pública relevante, o personas desconocidas que accidentalmente se hallan en medios de transporte, plazas, calles, etc., y por el inmediato fin de causar pánico en la población.

Como dice MUNÓZ CONDE⁶, a pesar de no existir un concepto jurídico unánimemente aceptado, la utilización del término en el Código Penal y en la Constitución obliga a elaborarlo para definir su ámbito de aplicación. Algunos autores lo definen, desde el punto de visto sociológico, como un tipo de delincuencia violenta; otros autores destacan el carácter organizado del fenómeno terrorista, pero lo cierto es que la mayoría concluye que se debe exigir un elemento teleológico o finalidad social o política, consistente en el interés por desestabilizar el sistema democrático y los pilares que lo sustentan.

CUELLO CALÓN⁷ lo define como la situación creada mediante *«la ejecución repetida de delitos, de un estado de alarma o de terror en la colectividad o en ciertos grupos sociales para imponer o favorecer la difusión de determinadas doctrinas sociales o políticas»*; por su parte GARCÍA VALDÉS⁸ define el terrorismo como *«aquella conducta delictiva que mediante actos de extrema violencia o grave intimidación, y con un fin subversivo, trata de destruir el sistema político democrático empleando, a estos efectos, medios selectivos o catastróficos»*.

En mi opinión esta definición estaría incompleta puesto que deja fuera de la consideración de terrorismo aquellas acciones violentas llevadas a cabo con una finalidad

⁵ JIMÉNEZ DE ASÚA, L. *Tratado de derecho penal*, Ed. Losada, Buenos Aires, 1963-1965, pág. 237.

⁶ MUNÓZ CONDE, F. *Derecho penal Parte especial*, 8ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1990, pág. 779.

⁷ CUELLO CALÓN, E. *Manual de Derecho Penal. Parte general, tomo I, vol. I, edición XVIII*, ed. Bosch, Barcelona, 1981. Actualizada y puesta al día por CAMARGO HERNÁNDEZ, C. pág. 319.

⁸ GARCIA VALDÉS, C. *La legislación antiterrorista. Anuario Derecho Penal y ciencias penales, tomo XXVII, fascículo II*, 1984, pág. 295

distinta a la política, como podrían ser los actos de violencia perpetrados en nombre de la religión por grupos islamistas, como Al Qaeda o Daesh, que reivindican sus actos en respuesta al ataque del supuesto invasor que trata de arrebatárles sus creencias y cambiar su forma de vida y costumbres. Prueba de esto son los actos de terrorismo llevados a cabo en el ámbito internacional, así como en España el 11 de marzo de 2004.

Señala BUENO ARÚS⁹ que son tres las cuestiones básicas en torno a los delitos de terrorismo: la violencia como medio, el terror como resultado y la finalidad política perseguida por los autores. MESTRE DELGADO¹⁰ se refiere al terrorismo como hechos delictivos de especial gravedad, que conllevan un mayor reproche penal, no obstante, este criterio objetivo debe conjugarse en referencia a la finalidad perseguida o a la estructura (banda organizada y armada) que sustenta esta criminalidad.

Por tanto, en cuanto a los elementos que componen el fenómeno terrorista, parece existir consenso en la doctrina al entender que en el fenómeno terrorista están implícitos los elementos de finalidad política, social, religiosa o ideológica (elemento teleológico) y de realización desde una entidad asociativa (elemento estructural), acompañados en la mayoría de las ocasiones de alarma e intimidación pública.

1. El concepto de terrorismo en los instrumentos jurídicos internacionales.

La definición de terrorismo en el ámbito internacional no ha sido pacífica, ha encontrado muchos obstáculos, especialmente cuando los intereses en juego son políticos o económicos. En el presente trabajo nombraremos algunos de los instrumentos jurídicos internacionales, sin pretender ser exhaustivos, lo cual nos llevaría a otro tipo de trabajo.

Uno de los primeros intentos por delimitar el concepto de terrorismo en un instrumento jurídico internacional se produce en la Conferencia de Varsovia de 1927, al delimitarlo como «el empleo internacional de cualquier medio capaz de hacer correr un peligro común». Esta definición es bastante vaga e imprecisa, y en ella se podrían incluir otros fenómenos delictivos al margen del terrorismo.

⁹ BUENO ARÚS F. *Principios Generales de la legislación antiterrorista*. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, número 11, Madrid, 1986, pág. 136.

¹⁰ MESTRE DELGADO E. *Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional*. Ed. Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1987, págs. 37 y 58.

La Convención de Ginebra para la Prevención y la Represión del terrorismo de 16 de noviembre de 1937 establece que "en la presente convención, en su artículo primero 1º y 2º, la expresión "actos de terrorismo" se entiende de hechos criminales dirigidos contra un Estado con el objetivo o naturaleza para provocar el terror contra personalidades determinadas, grupo de personas o en el público". Como dice MORAL DE LA ROSA¹¹, en esta definición subyace la idea de aterrorizar personas determinadas o al grupo en general, pero el objetivo es crear terror en el ente en el cual desarrollan su actividad, el Estado al cual pertenecen.

Las Declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas correspondientes a su 25º periodo de sesiones, 2625, adoptada el 24 de octubre de 1970, y la 2727 de 16 de diciembre del mismo año, contemplan el terrorismo como un problema entre Estados: *"Todos los estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro estado"*¹².

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó en 2001 la Resolución 1373, en la que se dictan normas para la prevención y castigo del terrorismo, tales como que se prevenga y reprima la financiación de todo acto terrorista, se tipifiquen como delito la provisión o recaudación de fondos que se utilizarán para perpetrar actos de terrorismo, congelación de los fondos y demás activos financieros, medidas de cooperación entre países, etc.

Por otra parte, el Convenio Europeo de 27 de enero de 1977, para la Represión del Terrorismo, ratificado por España por instrumento de 9 de mayo de 1980, no define lo que es el terrorismo, pero, se establecen criterios objetivos en la determinación del concepto de terrorismo. Así el artículo 1 enumera los delitos que a efectos de extradición no se consideran como políticos, y enumera como delitos de terrorismo, a los efectos de extradición entre Estados contratantes, los delitos graves dirigidos contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas que tengan derecho a una protección internacional, incluidos los agentes diplomáticos, los delitos que impliquen rapto, toma de rehenes o secuestro arbitrario.

¹¹ MORAL DE LA ROSA, J. *Aspectos penales y criminológicos del terrorismo*. Ed. Centro de Estudios Financieros. Madrid, 2005, pág.164.

¹² ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Resolución 2625 (XXIV), 24 de octubre 1970 [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2625\(XXV\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2625(XXV)), 16-06-2016.

En el ámbito de la Unión Europea, la Decisión Marco 2002/475/JAI, del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo, no define lo que es terrorismo, no obstante establece cuáles son los delitos que la legislación de todos los países miembros deben tipificar: «Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se consideren delitos de terrorismo los actos intencionados a que se refieren las letras a) a i) tipificados como delitos según los respectivos Derechos nacionales que, por su naturaleza o su contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a una organización internacional cuando su autor los cometa con el fin de:

intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional;

- a. atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte;
- b. atentados graves contra la integridad física de una persona;
- c. secuestro o toma de rehenes;
- d. destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico;
- e. apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías;
- f. fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas;
- g. liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;

- h. perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;
- i. amenaza de ejercer cualesquiera de las conductas enumeradas en las letras a) a h).»¹³

Posteriormente, el Convenio nº 196, del Consejo de Europa, para la prevención del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, sin llegar a definir el terrorismo, en su preámbulo nos da una aproximación a lo que debemos entender por terrorismo cuando dice: «los actos terroristas, por su naturaleza o contexto, tienen por objeto intimidar gravemente a una población, o presionar indebidamente a un gobierno o a una organización internacional para que cumplan o se abstengan de cumplir cualquier acto, o para desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional»¹⁴.

En el ámbito europeo por el Consejo de Europa, el 19 de mayo de 2015, fue adoptado el protocolo adicional al Convenio de 2005, que tiene por objeto facilitar la aplicación de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2178, de 2014, sobre los combatientes terroristas extranjeros y en particular, tipificar como delitos determinados actos definidos en la disposición operativa 6 de dicha resolución. Con este protocolo la Unión Europea se sitúa en armonía con la Organización de las Naciones Unidas en lo relativo a la prevención del terrorismo, actualizando sus instrumentos jurídicos de acuerdo con la nueva configuración del terrorista yihadista.

Recientemente, en el seno de la Unión Europea se ha aprobado la Directiva de 15 de marzo de 2017 referente a la lucha contra el terrorismo. El objeto de esta Directiva es unificar en los Estados miembros la definición de los delitos de terrorismo y adecuar la lucha contra el terrorismo a las nuevas modalidades comisivas y a su carácter globalizado. Así, en el Título III de la Directiva se recoge la provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo, la captación para el terrorismo, el adiestramiento para el terrorismo, la recepción de adiestramiento para el terrorismo, el viaje o la organización de éste con fines terroristas y la financiación del terrorismo:

¹³ Decisión Marco de la Unión Europea 2002/475/JAI del Consejo de 13 de junio de 2002.

¹⁴ Convenio nº 196 del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005.

“TÍTULO III

DELITOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS

Artículo 5 Provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se tipifique como delito, cuando se cometa intencionadamente, el hecho de difundir o hacer públicos por cualquier otro medio, ya sea en línea o no, mensajes destinados a incitar a la comisión de uno de los delitos enumerados en el artículo 3, apartado 1, letras a) a i), siempre que tal conducta preconice directa o indirectamente, a través, por ejemplo, de la apología de actos terroristas, la comisión de delitos de terrorismo, generando con ello un riesgo de que se puedan cometer uno o varios de dichos delitos.

Artículo 6 Captación para el terrorismo

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se tipifique como delito, cuando se cometa intencionadamente, el hecho de instar a otra persona a que cometa o contribuya a la comisión de cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3, apartado 1, letras a) a i), o en el artículo 4.

Artículo 7 Adiestramiento para el terrorismo

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se tipifique como delito, cuando se cometa intencionadamente, instruir en la fabricación o el uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o en otros métodos o técnicas concretos, a los fines de la comisión o la contribución a la comisión de cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3, apartado 1, letras a) a i), con conocimiento de que las capacidades transmitidas se utilizarán con tales fines.

Artículo 8 Recepción de adiestramiento para el terrorismo

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se tipifique como delito, cuando se cometa intencionadamente, recibir instrucción en la fabricación o el uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o en otros métodos o técnicas concretos, a los fines de la comisión o la

contribución a la comisión de cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 3, apartado 1, letras a) a i).

Artículo 9 Viaje con fines terroristas

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que se tipifique como delito, cuando se cometa intencionadamente, el hecho de viajar a un país que no sea ese Estado miembro a los fines de la comisión o la contribución a la comisión de un delito de terrorismo a tenor del artículo 3, de la participación en las actividades de un grupo terrorista con conocimiento de que dicha participación contribuirá a las actividades delictivas de tal grupo a tenor del artículo 4, o del adiestramiento o la recepción de adiestramiento para el terrorismo a tenor de los artículos 7 y 8.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se tipifiquen como delito, cuando se cometan intencionadamente, las siguientes conductas:

a) el viaje a un Estado miembro a los fines de la comisión o la contribución a la comisión de un delito de terrorismo a tenor del artículo 3, de la participación en las actividades de un grupo terrorista con conocimiento de que dicha participación contribuirá a las actividades delictivas de tal grupo a tenor del artículo 4, o del adiestramiento o la recepción de adiestramiento para el terrorismo a tenor de los artículos 7 y 8, o

b) los actos preparatorios realizados por una persona que entre en dicho Estado miembro con ánimo de cometer o contribuir a la comisión de un delito de terrorismo a tenor del artículo 3.

Artículo 10 Organización o facilitación de viajes con fines terroristas

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se tipifique como delito, cuando se cometa intencionadamente, todo acto de organización o facilitación con el que se ayude a cualquier persona a viajar con fines terroristas a tenor del artículo 9, apartado 1, y apartado 2, letra a), con conocimiento de que la ayuda prestada tiene dicha finalidad.

Artículo 11 Financiación del terrorismo

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se tipifique como delito, cuando se cometa intencionadamente, el hecho de aportar o recaudar fondos, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con ánimo de que se utilicen o con conocimiento de que se vayan a utilizar, en su totalidad o en parte, a los fines de la comisión o la contribución a la comisión de cualquiera de los delitos enumerados en los artículos 3 a 10.

2. Cuando la financiación del terrorismo contemplada en el apartado 1 del presente artículo se refiera a alguno de los delitos establecidos en los artículos 3, 4 o 9, no será necesario que los fondos se utilicen efectivamente, en su totalidad o en parte, a los fines de la comisión o la contribución a la comisión de cualquiera de dichos delitos, ni que el responsable criminal tenga conocimiento del delito o delitos concretos para los que se van a utilizar dichos fondos”¹⁵.

Asimismo prevé, para combatir el terrorismo en internet, la eliminación en origen de los contenidos en línea que constituyan una provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo, y establece medidas de apoyo y asistencia a las víctimas.

Estas normas debían ser adoptadas por los Estados miembros antes del 8 de septiembre de 2018.

2. El concepto de terrorismo en la legislación penal española.

La legislación antiterrorista en la actualidad, a diferencia de la del pasado, en la que los delitos de terrorismo se encontraban recogidos en una ley especial, se encuentra recogida en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, reformada recientemente por la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo.

Los delitos de terrorismo se encuentran tipificados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y se divide en dos secciones, que comprenden los artículos 571 a 580. La sección 1.^a lleva por rúbrica

¹⁵ Directiva (UE) 2017/541, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo.

«De las *organizaciones y grupos terroristas*» y la sección 2ª lleva por rúbrica «*De los delitos de terrorismo*»

El legislador español recoge en el preámbulo de la LO 2/ 2015 la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2178, aprobada el 24 de septiembre de 2014. En dicha resolución se muestra la preocupación de la Comunidad Internacional por el recrudecimiento de la actividad terrorista y por la intensificación del llamamiento a cometer atentados en todas las regiones del mundo. En el punto 6 de la mencionada Resolución recuerda la Resolución 1373 de 2001, en virtud de la cual todos los Estados miembros tienen la obligación de velar por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos.

La Ley Orgánica 2/2015 recoge la definición del delito de terrorismo en el artículo 573, inspirada en la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo, modificada por la Decisión Marco 2008/919/JAI, de 28 de noviembre de 2008.

La definición recogida en el artículo 573 CP establece:

«1. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.

- 3.^a Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
- 4.^a Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior.
3. Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los delitos tipificados en este Capítulo.»¹⁶

3. El concepto de terrorismo en la jurisprudencia

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como del Tribunal Supremo, han configurado un concepto de terrorismo. Destacamos la sentencia del TC 199/1987, FJ 4, que afirma:

“El terrorismo característico de nuestro tiempo, como violencia social o política organizada, lejos de limitar su proyección a unas eventuales actuaciones individuales susceptibles de ser configuradas como «terroristas», se manifiesta ante todo como una actividad propia de organizaciones o de grupos, de «bandas», en las que usualmente concurrirá el carácter de «armadas». Característico de la actividad terrorista resulta el propósito, o en todo caso el efecto, de difundir una situación de alarma o de inseguridad social, como consecuencia del carácter sistemático, reiterado, y muy frecuentemente indiscriminado, de esta actividad delictiva. De ahí que no quepa excluir la posibilidad de que determinados grupos u organizaciones criminales, sin objetivo político alguno, por el carácter sistemático y reiterado de su actividad, por la amplitud de los ámbitos de población afectados, puedan crear una situación de alarma y, en consecuencia, una situación de emergencia en la seguridad pública que autoriza (o legitima) a equipararlos a los grupos terroristas propiamente dichos, como objeto de las medidas excepcionales previstas en el art. 55.2 de la Constitución. Ello se comprueba además con la lectura de la discusión parlamentaria del precepto constitucional, en la que se constata un tratamiento común de

¹⁶ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

formas delictivas que suponen, en su intención o en su resultado, un ataque directo a la sociedad y al propio Estado social y democrático de Derecho.”¹⁷

Este concepto es complementado por la STC 89/1993, de 12 de marzo. Su Fundamento Jurídico tercero señala que:

“la criminalidad terrorista conlleva un desafío a la esencia misma del Estado democrático”¹⁸.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia 2/1997, de 29 de noviembre, define el terrorismo como:

“una actividad planificada que, individualmente o con la cobertura de una organización, con reiteración o aisladamente, y a través de la utilización de medios o la realización de actos destinados a crear una situación de grave inseguridad, temor social o de alteración de la paz pública, tiene por finalidad subvertir total o parcialmente el orden político constituido.”¹⁹

De todo ello podemos extraer, como dice CAMPO MORENO²⁰, que el terrorismo es la violencia social o política que tiene como objetivo la destrucción del orden democrático constitucional.

III. EL TERRORISMO EN ESPAÑA.

La dictadura del General Franco se prolongó desde la finalización de la guerra civil española en 1939, hasta el fallecimiento del dictador Francisco Franco en 1975. Durante esta época y hasta la actualidad han surgido y operado en España varios grupos terroristas de diferentes ideologías.

¹⁷ STC 199/1987, de 16 de diciembre de 1987. Recursos de inconstitucionalidad 285 y 292/1985, interpuestos respectivamente por el Parlamento de Cataluña y el Parlamento del País Vasco frente a la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución.

¹⁸ STC 89/1993, de 12 de marzo de 1993. Recurso de inconstitucionalidad núm. 1.491/88, promovido por el Parlamento Vasco contra la Ley Orgánica 3/1988, de 25 de mayo, de Reforma del Código Penal.

¹⁹ STS 2/1997, de 29 de noviembre (Sentencia de la Mesa Nacional de Herri Batasuna)

²⁰ CAMPO MORENO. Represión penal del terrorismo. Una visión jurisprudencial. Ed. Editorial General del Derecho. Valencia 1997, pág. 25.

La primera víctima mortal por acto de terrorismo en España fue la niña Begoña Urroz, por una bomba que estalló el 27 de junio de 1960 en la estación de tren de Amara (San Sebastián). En ocasiones se le ha atribuido esta muerte al grupo terrorista Eta, sin embargo, todos los indicios apuntan a la autoría del DRIL, el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, un efímero grupo hispano luso, antifranquista y antisalazarista, fundado en 1959 y cuya acción más conocida fue el secuestro del buque portugués Santa María a principios de 1961²¹:

1.-Grupos terroristas de ideología nacionalista radical

La más sangrienta y longeva banda terrorista en España ha sido ETA, Euskadi Ta Askatasuna, que traducido al español significa “País Vasco y Libertad”, de ideología nacionalista radical separatista. Su principal objetivo es la creación del País Vasco como Estado independiente. Las distintas ramas en que se ha escindido esta organización son responsables de la muerte de más de 800 personas entre 1968 y 2010.

La primera víctima mortal de ETA fue José Antonio Pardines, guardia civil asesinado en 1968, siendo la última víctima el Gendarme francés Jean-Serge Nérin, asesinado en París el 16 de marzo de 2010.

Según los datos de la Fundación Víctimas del Terrorismo, el balance de la actividad de ETA asciende a 857 víctimas mortales.

Además de las víctimas mortales, heridos y cuantiosos daños materiales causados, la banda terrorista ETA es la responsable de la existencia de otro tipo de víctimas, cual son los amenazados.

Este colectivo de víctimas está compuesto por todas aquellas personas que vivieron con la angustia de sufrir un atentado, y que en muchas ocasiones tuvieron que abandonar sus negocios, casas y su tierra para ponerse a salvo en otra parte de España.

Algunos amenazados lo eran simplemente por pertenecer a determinados colectivos que estaban en el objetivo de ETA (miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, militares, cargos públicos de partidos constitucionalistas, periodistas, intelectuales críticos con

²¹<https://observatorioterrorismo.com/historia/jose-antonio-pardines-la-primera-victima-mortal-de-eta/>

el terrorismo, etc.). Otras personas formaban parte del grupo de amenazados por diversos motivos, como el simple hecho de haberse negado a pagar el impuesto revolucionario exigido por ETA o ser acusado por los terroristas de cualquier cosa que les hacía merecedores de un ataque (supuestos confidentes de la policía, etc.).

La amenaza terrorista obligó a miles de personas a vivir con protección policial durante años y muchas otras se vieron forzadas a abandonar su casa y su trabajo para buscar seguridad en otra parte.

En Cataluña han existido dos grupos terroristas: ÈPOCA (Exèrcit Popular Català) y TERRA LLIURE.

ÈPOCA fue un grupo armado secesionista catalán que surgió en la década de los 70. Su objetivo era la creación de un Estado catalán independiente del Estado español (Los Països Catalans), formado por Cataluña, la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, territorios del Estado francés y Andorra. Como forma de gobierno aspiraban a instaurar una república popular de tipo marxista.

El Exèrcit Popular Català cometió varios asesinatos que causaron un gran impacto público, debido a la relevancia de las víctimas y la crueldad del método empleado. El método empleado en sus atentados fue la colocación de bombas adosadas al cuerpo de las víctimas. De esta manera asesinaron al industrial y presidente de la empresa química Cros S.A., José María Bultó, el 9 de mayo de 1977, y al ex alcalde de Barcelona, Joaquín Viola, y su esposa el 25 de enero de 1978.

Al final de la década de los 70 la organización terrorista ÈPOCA se disolvió y sus integrantes pasaron a formar parte del grupo terrorista catalán TERRA LLIURE.

TERRA LLIURE fue una organización terrorista catalana de extrema izquierda, que estuvo operativa entre los años 1978 y 1991. Pretendía por medio de la lucha armada la reunificación e independencia de los llamados Países Catalanes.

Cometió más de 200 atentados, con un resultado de cinco víctimas mortales, cuatro de ellas miembros de la banda, y varias decenas de heridos.

Tras su disolución en el año 1991, algunos de sus dirigentes pasaron a integrarse en el partido político Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

En Galicia existió un grupo terrorista denominado Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (EGPGC), cuyo objetivo era conseguir la creación del Estado independiente gallego de corte socialista. Fue fundado en 1986 y estuvo activo hasta 1993. Entre 1986 y 1991 cometió más de noventa atentados, en su mayoría contra torres de alta tensión de Unión Fenosa en zonas deshabitadas.

Entre sus atentados, los que obtuvieron mayor repercusión social fueron los que tuvieron como objetivo el chalé de Manuel Fraga en la localidad de Perbes (La Coruña) en 1988, en el que no se produjeron daños personales, y contra la discoteca Clangor de Santiago de Compostela. Este último pudo ser una auténtica masacre. Los terroristas pretendían explosionar un artefacto explosivo cuando estuviese vacía, pero la inexperiencia de los terroristas en el manejo de artefactos explosivos y las vibraciones producidas por la música provocaron la detonación del explosivo antes de lo previsto, cuando el local se encontraba lleno. El resultado fue de dos terroristas y otra persona muertos, y otros 49 jóvenes heridos. La otra víctima mortal de este grupo terrorista fue un guardia civil asesinado en el municipio coruñés de Irijoa en 1989.

El EGPGC desapareció en 1993, tras ser desmantelado completamente por la Policía y la Guardia Civil.

En Canarias surgió otro grupo terrorista, el Movimiento por la Autodeterminación del Archipiélago Canario (MPAIAC), cuyo objetivo era la secesión del archipiélago canario de España. Fue fundado por el Abogado penalista canario Antonio Cubillo en 1964.

A la organización terrorista MPAIAC se le atribuyen más de 200 actos terroristas, y es el responsable directo de la muerte de un artificio de la Policía Nacional que se disponía a desactivar una bomba colocada en una sucursal del Banco de Vizcaya, en la ciudad de La Laguna.

De una forma indirecta el MPAIAC es responsable del mayor accidente aéreo de la historia, y que se produjo en el aeropuerto de los Rodeos en Tenerife.

La colocación de un artefacto explosivo en el Aeropuerto de Gran Canaria, en marzo de 1977, obligó a las autoridades aeroportuarias a desviar el tráfico aéreo al aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife, originando una congestión del tráfico y la colisión en vuelo de dos aeronaves, dando lugar al mayor accidente aéreo de la historia, con 583 fallecidos.

La STS 67/2014 -ECLI: ES:TS: 2014:67- recoge en su Fundamento de Derecho Primero, 2 g): *“La causa de la inusual saturación del tráfico aéreo en el aeropuerto de Los Rodeos fue la explosión en el aeropuerto de Gando de una bomba que causó lesiones, al menos, a una persona y la autoría del atentado se atribuyó al MPAIAC”*, quedando así patente la relación causa-efecto y la responsabilidad del grupo terrorista en el accidente aéreo.

2. Grupos terroristas de ideología de extrema izquierda

El principal grupo terrorista de ideología marxista leninista de España fue el GRAPO, Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre.

Permaneció en activo hasta la primera década del siglo XXI y tenía como objetivo la instauración por la fuerza de una república socialista en España. Se le atribuye la autoría de alrededor de 87 asesinatos.

Su origen se remonta a los años 60, cuando un grupo de radicales marxistas-leninistas escindidos del PCE fundan la Organización de Marxistas Leninistas Españoles (OMLE), que se autodisolvió en 1975.²² De ahí surgió el Partido Comunista Español Reconstituído (PCE-r). En su I congreso, celebrado ese mismo año, toman la decisión de crear un brazo armado del partido, los GRAPO.

Su primer atentado lo cometieron el 2 de agosto de 1975 contra dos guardias civiles en el canódromo de Madrid, uno de los cuales falleció. Desde aquel primer atentado han causado 87 víctimas mortales. La última víctima mortal de este grupo fue un policía nacional que fue asesinado de un disparo en el barrio madrileño de Carabanchel el 17 de noviembre de 2000.

De las acciones terroristas cometidos por los GRAPO destacan: los secuestros del presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y Urquijo (11 diciembre 1976) y del teniente general y presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar Emilio Villaescusa

²² <https://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/31/espana/1117527674.html>. (Visitada el 19-01-2019)

Quilis (24 enero 1977); los asesinatos del director de Instituciones Penitenciarias Jesús Haddad (1978) y del presidente de la Sala VI del Tribunal Supremo Miguel Cruz Cuenca (8 enero 1979); y el atentado contra la cafetería madrileña "California 47" (26 mayo 1979), que produjo 8 muertos y 40 heridos²³.

3. Grupos terroristas de ideología de extrema derecha

El terrorismo de ideología ultraderechista ha actuado en España bajo diferentes organizaciones, entre las que destacan: BVE (Batallón Vasco Español), Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) o GAE (Grupos Armados Españoles). Todas ellas comparten el mismo objetivo, el regreso a una dictadura como la franquista y responder a ETA con un terrorismo de signo opuesto. Se les atribuyen unos 60 asesinatos entre 1975 y 1982.

Un informe de la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco cifra en 66 las personas que han muerto por la violencia ejercida por grupos de extrema derecha incontrolados y por el GAL, en el que también incluye a 63 heridos, y analiza 74 actos terroristas cometidos por distintos grupos criminales (Batallón Vasco Español, Triple A, Grupos Anti-ETA o GAE).

Concretamente el informe atribuye al GAL 24 asesinatos y 27 heridos, mientras que el Batallón Vasco Español cometió 18 asesinatos y causó heridas a otras 18, la Triple A asesinó a 8 personas y GAE (Grupos Armados Españoles) a otros seis²⁴.

4. Grupos terroristas yihadistas

Su objetivo es implantar un califato bajo una interpretación ortodoxa de la sharía, la ley islámica.

El Tribunal Supremo en su sentencia 4587/2008 - ECLI: ES:TS:2008:4587, N° de Recurso: 10012/2008-, define estos grupos terroristas como: "*Grupos terroristas de tipo yihadista que, por lo que ahora interesa, mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones, pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de*

²³ <https://www.elimparcial.es/noticia/107935/nacional/historia-de-los-grapo:-asesinatos-secuestros-y-extorsion-.html>, visitada el 19-01-2019

²⁴ <http://www.rtve.es/noticias/20080624/gobierno-vasco-asegura-extrema-derecha-gal-han-matado-66-personas/101671.shtml>, visitada el 19-01-2019.

tradición cristiano occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharía o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria”²⁵.

El primer atentado cometido en España por un grupo terrorista de esta orientación tuvo lugar en 1985 en el restaurante El Descanso. La explosión causó la muerte de 18 personas, todas ellas de nacionalidad española, e hirió a un centenar, de las cuales 14 eran estadounidenses.

El 11 de marzo de 2004 células yihadistas vinculadas a Al Qaeda causaron la mayor masacre terrorista de nuestra historia.

Se produjeron diez explosiones en cadena, con un resultado de 193 muertos y 2.062 heridos en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid. Fue el segundo mayor atentado cometido en Europa.

Recientemente, los atentados de Barcelona y Cambrils, cometidos el 17 de agosto de 2017, produjeron la muerte de 16 personas y dejaron más de un centenar de heridos.

El terrorismo de inspiración yihadista suma ya 284 víctimas mortales españolas o en atentados contra España²⁶, desde que en 1985 se cometiera el atentado contra el restaurante El Descanso hasta el pasado año.

IV. LEGISLACIÓN ANTERRORISTA EN ESPAÑA

La legislación antiterrorista en España se encontraba en principio regulada en la legislación especial, luego su regulación paso a estar recogida en los Códigos penales, conociendo inicialmente dichas causas la jurisdicción militar, hasta su conocimiento por la jurisdicción ordinaria.

²⁵ STS de 17-07-2008, 4587/2008 - ECLI: ES:TS:2008:4587, Nº de Recurso: 10012/2008-.

²⁶ CUADERNOS del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo n.º 5 MAYO 2018
<http://www.memorialvt.com/wp-content/uploads/2018/06/Cuaderno05.pdf> (visitada el 9 de enero de 2019).

1. La legislación antiterrorista durante la Dictadura franquista.

El 18 de julio de 1936 se produce un levantamiento miliar contra el Gobierno de la República y estalla la guerra civil. El golpe militar supuso el fin de la II República española, y la llegada al poder del General Francisco Franco.

Durante los primeros años de la dictadura destaca la siguiente normativa:

*Ley 1 de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y del comunismo*²⁷

La Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941, con la que se intenta suplir la falta de un nuevo Código penal conforme con los principios del régimen dictatorial, hasta su promulgación, y que recoge en su artículo 9:

*“El que ejecutare actos encaminados a la destrucción de obras, fábricas u otras dependencias militares, iglesias y otros edificios, puentes, diques, puertos, canales, embalses y vías de comunicación, materiales de transporte, conducciones de energía eléctrica o de otra fuerza motriz y otras construcciones análogas destinadas al servicio público, minas y polvorines que no pertenezcan al Ejército, depósitos de gasolina u otros combustibles, de naves, aeronaves y aeroplanos, a provocar incendios, emplear sustancias explosivas, inflamables, asfixiante y otras homicidas, a causar catástrofes ferroviarias, naufragios u otros hechos análogos, cuando se cometieren con el fin de atentar contra la seguridad del Estado o el de alterar el orden público, serán castigados con la pena de veinte años de reclusión a muerte. Si a consecuencia del hecho falleciere alguna persona o se causaren lesiones de las penadas en el número primero del artículo 423 del Código penal, se impondrá en todo caso pena de muerte”*²⁸

*Por Decreto de 23 de diciembre de 1944 se aprueba y promulga el nuevo Código Penal*²⁹, texto refundido de 1944, según la autorización otorgada por la Ley de 19 de julio de

²⁷ <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1940/062/A01537-01539.pdf> (consulta de 21 de enero de 2019).

²⁸ Boletín Oficial del Estado núm. 101, de 11 de abril de 1941, págs. 2434-2444: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1941/101/A02434-02444.pdf> (consulta de 21 de enero de 2019).

²⁹ Boletín Oficial del Estado núm. 13, de 13 de enero de 1945, págs. 427-472. <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1945/013/A00427-00472.pdf> (consulta de 21 de enero de 2019)

1944³⁰. Es el primer texto punitivo español que recoge el término “terrorismo” en su articulado, además de dar una definición jurídica del mismo.

La regulación de los delitos de terrorismo y tenencia de explosivos procede de la Ley de Seguridad del Estado de 1941, y se recoge en la Sección 2ª del capítulo XII del Título II: (*“Delitos contra la seguridad interior del Estado”*). En su artículo 260 se reproduce literalmente lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley de 1941: *“atentar contra la seguridad del Estado o alterar el orden público”*.

El artículo 262 tipifica la utilización de sustancias explosivas o inflamables o armas con la finalidad de *“atemorizar a los habitantes de una población o a clases o sectores determinados de la misma, o de realizar venganzas o represalias de carácter social o político”*.

El artículo 263 recoge el delito especial de amenazas; en el artículo 264 se castigan la tenencia, fabricación, transporte o suministro de sustancias o aparatos explosivos inflamables, asfixiantes y otros homicidas; y el artículo 268 tipifica el delito de apología del terrorismo:

“La apología pública, oral o escrita o por medio de la imprenta, u otro procedimiento de difusión de los delitos comprendidos en este Título, y la de sus culpables, será castigada con la pena de prisión menor”.

Debemos mencionar el *Decreto-Ley sobre represión de los delitos de bandidaje y terrorismo, de 18 de abril de 1947*³¹:

“Los delitos de terrorismo y bandidaje, que constituyen las más graves especies delictivas de toda situación de posguerra, secuela de la relajación de vínculos morales y de la exaltación de los impulsos de crueldad y de acometividad de gentes criminales e inadaptadas, requieren especiales medidas de represión, cuya gravedad corresponda a la de los criminales que se trata de combatir”

En el artículo 9 se concede a la jurisdicción militar su conocimiento y enjuiciamiento:

³⁰ Boletín Oficial del Estado núm. 204, de 22 de julio de 1944, págs. 5580-5583:

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1944/204/A05580-05583.pdf> (consulta de 21 enero de 2019)

³¹ Decreto-Ley (rectificado) de 18 de abril de 1947 sobre represión de los delitos de bandidaje y terrorismo, en Boletín Oficial del Estado núm. 126, de 6 de mayo de 1947, págs. 2686-2687: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1947/126/A02686-02687.pdf> visitada 21 de enero de 2019

“La jurisdicción militar será la competente para conocer de los delitos castigados en esta Ley, que serán juzgados por procedimiento sumarísimo.

Si por las especiales circunstancias de los hechos no revistieran estos la gravedad suficiente para ser calificados como delito de terrorismo o bandidaje y debieran serlo conforme a la legislación común, la jurisdicción militar podrá inhibirse de su conocimiento en favor de la ordinaria.”

El Decreto 1794/1960, de 21 de septiembre, revisando, y unificando la Ley de dos de marzo de mil novecientos cuarenta y tres y el Decreto-ley de dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta y siete³².

En el año 1971 se promulgan dos leyes que introducen importantes reformas en la regulación de los delitos de terrorismo:

La Ley 42/1971, de 15 de noviembre, que añadirá un nuevo Capítulo al Código de Justicia militar sobre delitos de terrorismo³³ y la Ley 44/1971, de 15 de noviembre, sobre reforma del Código Penal, que revisará los contenidos en el Código penal de 1944, derogando entre otros, el Decreto 1794/1960³⁴.

Lo que se pretendía con esta reforma era separar el conocimiento de dichos delitos: así la Ley 42/1971³⁵ encomienda a la Jurisdicción Militar la competencia para enjuiciar las acciones “que provienen de grupos u organizaciones con carácter de mayor permanencia, debe encomendarse a la Jurisdicción Militar”; y la Ley 44/1971³⁶ a la jurisdicción ordinaria las acciones de los actos terroristas realizados individualmente o, por grupos no organizados ni estables, y la simple pertenencia a éstos.

³² BOE núm. 231, de 26 de septiembre de 1960, págs. 13405-13406:

<https://www.boe.es/boe/dias/1960/09/26/pdfs/A13405-13406.pdf> (visitada el 21 de enero de 2019).

³³ Artículos 294 bis, a), bis, b), bis c), bis d), y bis e), en BOE núm. 274, de 16 de noviembre de 1971, págs. 18414-18415: <https://www.boe.es/boe/dias/1971/11/16/pdfs/A18414-18415.pdf> (visitada el 21 de enero de 2019)

³⁴ BOE núm. 274, de 16 de noviembre de 1971, págs. 18415-18419:

<https://www.boe.es/boe/dias/1971/11/16/pdfs/A18415-18419.pdf> (visitada el 21 de enero de 2019)

³⁵ Ley 42/1971, de 15 de noviembre, por la que se adicionan determinados artículos al Código de Justicia Militar.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-1452> (visitada el 21 de enero de 2019)

³⁶ Ley 44/1971, de 15 de noviembre, sobre reforma del Código Penal.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-1454> (visitada el 21 de enero de 2019)

La última disposición, en este sentido, antes de la muerte de Franco, es el Decreto Ley 10/1975, de 26 de agosto³⁷, sobre prevención del terrorismo, que, como indica su Preámbulo, respondía a:

“los brotes de terrorismo inhumano que han aparecido en los últimos tiempos con frecuencia y gravedad suficientes para exigir por parte del gobierno y de la sociedad española una reacción enérgica”.

Este Decreto-Ley agrava las penas del sujeto activo cuando el delito se comete *“contra la autoridad, agente de la autoridad, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, y demás funcionarios públicos”*:

Artículo Primero. Dos:

Cuando los delitos a que se refiere el párrafo anterior se cometieren contra la Autoridad, Agentes de la autoridad, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado y demás funcionarios públicos se aplicarán, en su grado máximo, las penas señaladas en sus respectivos casos.

En este sentido, si en el acto terrorista se producía la muerte de éstos, se aplicaría la pena de muerte al causante:

Artículo Primero. Tres:

Los que habiendo secuestrado a una persona causaren su muerte o mutilación serán castigados con la pena de muerte.

Imponía las penas previstas en su grado máximo para el delito de asociación ilícita en los supuestos en que estos delitos fueren cometidos por *“grupos comunistas, anarquistas, separatistas y aquellos otros que preconicen o empleen la violencia como instrumento de acción política o social”*:

Artículo cuarto:

³⁷ Decreto ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-18072> (visitada el 21 de enero de 2019)

“Declarados fuera de la Ley los grupos u organizaciones comunistas, anarquistas, separatistas y aquellos otros que preconicen o empleen la violencia como instrumento de acción política o social, los que organizaren o dirigieren estos grupos, los meros afiliados y los que, mediante sus aportaciones en dinero, medios materiales o de cualquier otra manera auxiliaren al grupo u organización, incurrirán respectivamente en el grado máximo de las penas previstas en el Código Penal para las asociaciones ilícitas de aquella naturaleza.

A quienes, por cualquier medio, realizaren propaganda de los anteriores grupos u organizaciones que vaya dirigida a promover o difundir sus actividades, se le impondrá la pena correspondiente a tal delito en su grado máximo.”

2. La legislación antiterrorista durante la transición política española.

A finales de 1975 fallece el dictador Francisco Franco y da comienzo la transición política a la democracia. Se abre un periodo de amplias reformas políticas, que culmina con las elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977. Durante este periodo la legislación de la dictadura continua en vigor, pero las reformas legislativas irán desmontándola poco a poco.

Destacan estas cuatro disposiciones:

El Decreto-ley 2/1976, de 18 de febrero, por el que se revisa el de prevención del terrorismo 10/1975, de 26 de agosto, y se regula la competencia para el enjuiciamiento de tales delitos, que atribuye a los jueces ordinarios el conocimiento y fallo de determinadas conductas terroristas³⁸:

“Artículo primero.

El enjuiciamiento de los delitos de terrorismo corresponderá a la jurisdicción ordinaria, salvo que se den conjuntamente las siguientes condiciones:

Primero. Que los hechos hayan sido ejecutados por grupos armados con organización de tipo militar o paramilitar.

³⁸ BOE núm. 43, de 19 de febrero de 1976, pág. 3445:

<https://www.boe.es/boe/dias/1976/02/19/pdfs/A03445-03445.pdf> (visitada el 22 de enero de 2019)

Segundo. Que tales hechos tiendan a atacar el orden institucional y produzcan situación de alarma o grave alteración del orden público.

En este caso, el conocimiento de tales delitos corresponderá a la jurisdicción militar”.

El Real Decreto-Ley 1/1977, de 4 de enero, por el que se crea la Audiencia Nacional³⁹:

“El presente Real Decreto-ley responde al propósito de abordar la solución de tales problemas mediante la creación de una Audiencia Nacional, concebida sobre el modelo de las clásicas Audiencias, en cuanto órganos colegiados de la Administración de Justicia, y sin más diferencia que la de su ámbito territorial, pues mientras éstas ejercen su jurisdicción sobre una parte del territorio nacional, aquélla la extiende a la totalidad de él, en plena coherencia con los términos en que se define su competencia material: En lo penal, conocimiento de los delitos en que por el modo y el ámbito de actuación de sus autores o por la difusión de sus efectos se exceden los límites de la provincia; en lo contencioso-administrativo, revisión de actos emanados de Autoridades administrativas con competencia sobre todo el territorio nacional.”

El Real Decreto-Ley 2/77, de 4 de enero, por el que se suprimen el Tribunal y Juzgados de Orden Público, y se crean en Madrid dos nuevos Juzgados de Instrucción⁴⁰:

“Artículo primero.

Se suprimen el Tribunal y los Juzgados de Orden Público, creados por Ley ciento cincuenta y cuatro/mil novecientos sesenta y tres, de dos de diciembre, y Decreto mil trescientos catorce/mil novecientos setenta y dos de trece de abril.

Artículo segundo.

La instrucción, conocimiento y fallo de las causas por los delitos que venían atribuidos a los órganos judiciales que se suprimen se atribuirán, en lo sucesivo, a los

³⁹ BOE núm. 4, de 5 de enero de 1977, páginas 172 a 174

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-166> (visitada 22 de enero de 2019)

⁴⁰ Real Decreto-ley por el que se suprimen el Tribunal y Juzgados de Orden Público y se crean en Madrid dos nuevos Juzgados de Instrucción.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-167> (visitada el 22 de enero de 2019)

Juzgados, y Tribunales a que correspondan conforme a las normas de competencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artículo tercero.

Se crean en Madrid dos nuevos Juzgados de Instrucción, que se designarán con los números veintiuno y veintidós, y que comenzarán su funcionamiento el día de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley”.

Y el Real Decreto-ley 3/1977, de 4 de enero, sobre competencia jurisdiccional en materia de terrorismo⁴¹. Con este decreto se pretende que la mayoría de los delitos de terrorismo sean juzgados por la jurisdicción ordinaria y no por la militar, en particular por la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales de Instrucción:

“Artículo primero.

La instrucción, conocimiento y fallo de las causas por los delitos de terrorismo corresponderá exclusivamente a los Juzgados Centrales de Instrucción y a la Audiencia Nacional, sin más excepciones que las que resulten de la aplicación de los artículos noveno y trece del Código de Justicia Militar”.

En el periodo preconstitucional se iniciará una nueva etapa, desconocida hasta ahora, de destipificación del terrorismo⁴², como lo demuestra el artículo 2, párrafo 2, del Capítulo VIII de los Acuerdos políticos de la Moncloa, 8-27 de octubre de 1977:

“El orden público tendrá una proyección concreta y actual en cuanto protección del avance en la consolidación de la democracia y defensa frente a las agresiones de todo orden y especialmente las terroristas. La tipificación del terrorismo figurará en el Código Penal común, con eliminación de lo que al respecto figure en leyes especiales y se operará con los

⁴¹ Real Decreto-ley 3/1977, de 4 de enero, sobre competencia jurisdiccional en materia de terrorismo. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-168> (visitada el 22 de enero de 2019)

⁴² MARTÍNEZ DHIER, ALEJANDRO. *La Legislación Antiterrorista en la historia de nuestro derecho. España y el fenómeno terrorista en los siglos XIX y XX.* <http://revistas.um.es/analesderecho/article/view/272871> (visitada el 22 de enero de 2019)

criterios generalmente aceptados en los Convenios internacionales y en los países de Occidente”⁴³.

En la misma línea, la Ley 82/1978, de 28 de diciembre, de modificación del Código Penal en materia de terrorismo⁴⁴, convertirá los delitos de terrorismo en delitos comunes, diferenciando la violencia política, del propio delito político, con el objetivo de romper con la legislación anterior; así lo recogía el Convenio europeo para la represión del terrorismo, dado en Estrasburgo el 27 de enero de 1977, y ratificado por España el 9 de mayo de 1980. En el artículo primero se excluyen las conductas terroristas del concepto político en sí, a los efectos oportunos de la extradición entre los Estados contratantes:

“ARTICULO 1:

A los efectos de la extradición entre Estados contratantes, ninguno de los delitos mencionados a continuación se considerará como delito político, como delito conexo con un delito político o como delito inspirado por móviles políticos:

a) Los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio para la represión de la captura ilícita de aeronaves, firmado en La Haya el 18 de diciembre de 1970;

b) Los delitos comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio para la represión de actos ilícitos dirigidos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971;

c) Los delitos graves constituidos por un ataque contra la vida, la integridad corporal, o la libertad de las personas que tengan derecho a una protección Internacional, incluidos los agentes diplomáticos;

d) Los delitos que impliquen rapto, toma de rehenes o secuestro arbitrario;

⁴³ Los Pactos de la Moncloa. Texto completo del Acuerdo Económico y del Acuerdo Político, Madrid, 8-27 de octubre de 1977:

<http://www.mpr.gob.es/servicios2/publicaciones/vol17/>; artículo 7 del Capítulo VIII: “Se fortalecerán los medios de prevención y defensa frente al terrorismo. A este respecto, en particular, se creará una unidad de policía judicial, dependiente de los órganos judiciales competentes, para la investigación de delitos terroristas, y que bajo las órdenes directas de la autoridad judicial y al amparo de las autoridades otorgadas por la misma pueda desempeñar con eficacia y prontitud la función investigadora requerida” (visitada el 22 de enero de 2019).

⁴⁴ BOE núm. 11, de 12 de enero de 1979, páginas 750 a 751 <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-865> (visitada el 22 de enero de 2019)

e) Los delitos que impliquen la utilización de bombas, granadas, cohetes, armas de fuego automáticas, o cartas o paquetes con explosivos ocultos, en los casos en que dicha utilización represente un peligro para las personas;

f) La tentativa de comisión de alguno de los delitos anteriormente mencionados o la participación como coautor o cómplice de una persona que cometa o intente cometer dichos delitos”.

Debido a los numerosos y gravísimos actos de terrorismo cometidos en este periodo por grupos o bandas armados, se promulgó el Real Decreto-Ley 21/1978, de 30 de junio, sobre medidas en relación con los delitos cometidos por grupos o bandas armados⁴⁵, que fijará diversas medidas en relación con estos delitos:

“Artículo 1:

Las disposiciones contenidas en este Real Decreto-ley serán aplicables exclusivamente a los delitos de asesinato, lesiones graves, detención ilegal bajo rescate o imponiendo cualquier otra condición, detención ilegal con simulación de funciones públicas, depósito de armas o municiones, tenencia de explosivos, estragos, terrorismo y delitos conexos con los anteriores, siempre que sean cometidos por personas integradas en bandas o grupos organizados y armados.

Asimismo, se aplicarán a los miembros de dichas bandas o grupos”.

La competencia, instrucción, conocimiento y fallo se atribuirá a la Audiencia Nacional y a los Juzgados Centrales de Instrucción:

“Artículo segundo.

La instrucción, conocimiento y fallo de las causas por los delitos y conductas enumerados en el artículo anterior corresponderán exclusivamente a los Juzgados Centrales de Instrucción y a la Audiencia Nacional”.

⁴⁵ BOE núm. 156, de 1 de julio de 1978, páginas 15670 a 15671

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-16969 (visitada el 22 de enero de 2019)

Se faculta a la policía para prolongar el periodo de detención de forma indefinida, bastando con que la autoridad gubernativa lo solicite en el plazo de 72 horas, y la autoridad judicial lo autorizara en dicho plazo:

“la detención gubernativa podrá prolongarse el tiempo necesario para los fines investigadores, en cuyo caso la autoridad gubernativa deberá poner este hecho en conocimiento del Juez antes de que transcurra dicho plazo”.

No se exigirá la previa autorización judicial para entrar y registrar un domicilio o lugar cerrado, quedando suspendida la garantía de las comunicaciones:

“Artículo cuarto.

La autoridad gubernativa podrá ordenar la observación postal, telegráfica y telefónica para aquellas personas de las que se estime racionalmente puedan estar relacionadas o integradas en los grupos o bandas organizados a que se refiere el artículo primero de este Real Decreto-ley.”

A los condenados por estos delitos se les excluye de los beneficios de los indultos generales y particulares, de la libertad condicional y de la redención de penas por el trabajo:

“Artículo sexto.

Ni los indultos generales, si los hubiere, ni tampoco los particulares, podrán alcanzar a los condenados por cualesquiera de los delitos mencionados en el artículo primero. Tampoco serán de aplicación los beneficios legales de la libertad condicional y la redención de penas por el trabajo”.

La Ley 82/1978, de 28 de diciembre, de modificación del Código Penal en materia de terrorismo, elimina los delitos de terrorismo de los artículos 260 a 262, y Anexos 1, 2 y 3, del Código Penal:

“DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos doscientos sesenta, doscientos sesenta y uno y doscientos sesenta y dos del Código Penal, así como los artículos primero, segundo y tercero

*del anexo al Código Penal añadido por el Real Decreto-ley tres/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de enero*⁴⁶.

La Constitución de 1978 recogerá el fenómeno terrorista, en sus artículos 13.3 y 55.2⁴⁷.

Artículo 13

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

Artículo 55

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

En 1980 se promulga la Ley Orgánica 4/1980, de 21 de mayo, de reforma del Código Penal en materia de delitos relativos a las libertades de expresión, reunión y asociación⁴⁸. En este mismo año se ratifica el Convenio europeo para la represión del terrorismo⁴⁹, ya citado; y la Ley Orgánica 11/1980, de 1 de diciembre, sobre los supuestos previstos en el artículo 55, 2, de la Constitución⁵⁰:

“Artículo Primero.

⁴⁶ BOE núm. 11, de 12 de enero de 1979, páginas 750 a 751

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-865> (visitada el 23 de enero de 2019)

⁴⁷ BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, páginas 29313 a 29424

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229> (visitada el 23 de enero de 2019)

⁴⁸ BOE núm. 142, de 13 de junio de 1980, páginas 13096 a 13097

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-11880> (visitada el 23 de enero de 2019)

⁴⁹ Instrumento de Ratificación de 9 de mayo de 1980, del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1977. BOE núm. 242, de 8 de octubre de 1980, páginas 22357 a 22360.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-21629> (visitada el 23 de enero de 2019)

⁵⁰ BOE núm. 289, de 2 de diciembre de 1980, páginas 26645 a 26646

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-25996> (visitada el 23 de enero de 2019)

Uno. A los efectos previstos en el artículo cincuenta y cinco, dos, de la Constitución, se entenderá que las personas cuyos derechos fundamentales pueden ser suspendidos, en los supuestos y con el alcance que se determinan en la presente Ley, son aquellas que, presuntamente integradas o relacionadas bien con elementos terroristas, bien con bandas armadas que incidan gravemente en la seguridad ciudadana planeen, organicen, ejecuten, cooperen o inciten de modo directo, a la realización de las acciones que se especifican en el siguiente apartado, así como a quienes, una vez proyectadas, intentadas o cometidas las mismas, hicieren su apología pública o encubriesen a los implicados en ellas.

Dos. El ámbito de aplicación de la presente Ley comprenderá las acciones siguientes:

- a) Delitos contra la vida y la integridad física.*
- b) Detenciones ilegales bajo rescate, o bajo cualquiera otra condición, y detenciones ilegales con simulación de funciones públicas.*
- c) Tenencia o depósitos de armas, municiones o explosivos, así como su adquisición, fabricación, transporte o suministro.*
- d) Coacciones, amenazas o extorsiones.*
- e) Incendios y otros estragos.*
- f) Delitos contra la seguridad exterior del Estado.*
- g) Los delitos directamente conexos con los anteriores y en general, los que el Código Penal califique como terroristas”.*

En el año 1981 se promulga Ley Orgánica 2/1981, de 4 de mayo, que modifica y adiciona determinados artículos del Código Penal y del de Justicia Militar⁵¹. En su Disposición Adicional se atribuye la competencia para el conocimiento, instrucción y enjuiciamiento de los nuevos delitos señalados en el Código penal, a la Audiencia Nacional y a los Juzgados Centrales.

⁵¹ BOE núm. 107, de 5 de mayo de 1981, páginas 9477 a 9479
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-9983> (visitada el 23 de enero de 2019)

3. La legislación antiterrorista en el Código Penal de 1995

El vigente Código Penal fue aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, habiendo sido objeto de importantes y numerosas reformas.

Las modificaciones más importantes introducidas en el Código penal de 1995 en materia de terrorismo son:

- Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal⁵², añade el Capítulo VI al Título XXII del Libro II, y comprende los artículos 570 bis, 570 ter y 570 quáter y con la rúbrica: “*De las organizaciones y grupos criminales*”. Se añaden los artículos 570 bis, 570 ter, y 570 quáter. Se crea un Capítulo VII en el Título XXII del Libro II, que comprende los artículos 571 a 580, con la rúbrica: “*De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo*”. Se crea la Sección 1.ª del Capítulo VII del Título XXII del Libro II, que comprende el artículo 571, y lleva la rúbrica: “*De las organizaciones y grupos terroristas*”. Se modifica el artículo 571. Se crea la Sección 2.ª del Capítulo VII del Título XXII del Libro II, que comprende los artículos 572 a 580 y lleva la rúbrica: “*De los delitos de terrorismo*”. Se modifican los artículos 572, 574 y 576, se añaden los artículos 576 bis y se modifica el artículo 579.

- Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo⁵³. Con esta reforma los delitos de terrorismo se encuentran actualmente recogidos en el Capítulo VII (“De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo”), Sección 1.ª (“De las organizaciones y grupos terroristas”), y Sección 2.ª (“De los delitos de terrorismo”), en los artículos 571 al 580.

El objetivo principal de esta modificación es combatir el terrorismo yihadista, que, como señala la Exposición de Motivos, se caracteriza, precisamente, por haber incorporado esas nuevas formas de agresión, consistentes en nuevos instrumentos de captación,

⁵² BOE núm. 152, de 23 de junio de 2010, páginas 54811 a 54883
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-9953> (visitada el 23 de enero de 2019)

⁵³ BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015, páginas 27177 a 27185
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3440> (visitada el 23 de enero de 2018)

adiestramiento o adoctrinamiento en el odio, para emplearlos de manera cruel contra todos aquellos que, en su ideario extremista y violento, sean calificados como enemigos.

Se modifica el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del CP ("*De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo*").

Este capítulo se divide en dos secciones, que comprenden los artículos 571 a 580.

En la sección 1.^a ("*De las organizaciones y grupos terroristas*") se establece la definición de organización o grupo terrorista, así como la pena prevista para los que promuevan, constituyan, organicen o dirijan estos grupos o a quienes se integran en ellos.

En la sección 2.^a ("*De los delitos de terrorismo*"), en el artículo 573 se da una nueva definición del delito de terrorismo, que toma como referencia la Decisión Marco 2002/475/JAI, del Consejo de la Unión Europea, de 13 de junio de 2002, de lucha contra el terrorismo, modificada por la Decisión Marco 2008/919/JAI, de 28 de noviembre de 2008.

El artículo 573 bis establece la pena que corresponde a cada delito de terrorismo. El artículo 574 tipifica aquellas conductas relacionadas con el depósito de armas y explosivos, su fabricación, tráfico, suministro o la mera colocación o empleo de los mismos.

El artículo 575 tipifica el adoctrinamiento y el adiestramiento militar o de combate o en el manejo de toda clase de armas y explosivos, el adoctrinamiento y adiestramiento pasivo, recogiendo el adoctrinamiento que se realiza a través de Internet o de servicios de comunicación accesibles al público.

El artículo 576 establece las penas para las conductas relacionadas con la financiación del terrorismo, que incluyen las penas para la comisión del delito por imprudencia, derivado de la negligente omisión de los deberes procedentes de la normativa sobre blanqueo de capitales y prevención de la financiación del terrorismo. Se fija la responsabilidad penal para las personas jurídicas por estos delitos.

En el artículo 577 se tipifican y sancionan las formas de colaboración con organizaciones o grupos terroristas.

En los artículos 578 y 579 se castigan el enaltecimiento o justificación públicos del terrorismo, los actos de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, así como la difusión de mensajes o consignas para incitar a otros a la comisión de delitos de terrorismo. Tendrán una pena agravada cuando estos delitos sean cometidos mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, Internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información. La autoridad judicial podrá acordar como medida cautelar la retirada de estos contenidos.

El artículo 579 bis incorpora las penas de inhabilitación absoluta y la novedosa pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos.

El artículo 580 establece que los delitos de terrorismo serán perseguibles en España siempre que el culpable sea español, resida habitualmente en territorio español o se encuentre en España, con independencia de que sean o no punibles en el lugar de ejecución.

Al final de este trabajo se incorpora, como anexo, el cuadro comparativo entre la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica aquélla, y la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

V. EL DELITO DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓN TERRORISTA.

1. Consideraciones generales

La tipificación de la colaboración con organización terrorista, como delito independiente, aparece por primera vez con el Decreto Ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo.

Como dice GARCÍA SAN PEDRO⁵⁴, *“En lo que aquí interesa, y por lo que respecta al resto de las figuras, se tipifican por primera vez una serie de actos, alguno de los cuales son denominados por un sector de la doctrina -probablemente desde la perspectiva de la legislación actual como actos de colaboración y que ya desde ahora, vamos a definir como actos de soporte a la organización; de ellos, los realizados desde fuera de estos grupos -por el grupo de apoyo- podrán ser denominados como actos de colaboración”*.

Hasta la reforma del Código penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2015, el delito de colaboración con banda terrorista se encontraba tipificado en los artículos 575, 576 y 576 bis del Código Penal. A partir de dicha reforma pasa a tipificarse en el artículo 577. El preámbulo de la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo, recoge, sobre el delito concreto de colaboración con banda terrorista lo siguiente: *“El artículo 577 recoge la tipificación y sanción de las formas de colaboración con organizaciones, grupos o elementos terroristas, o que estén dirigidas a cometer un delito de terrorismo. Se contemplan específicamente las acciones de captación y reclutamiento al servicio de organizaciones o fines terroristas, agravando la pena cuando se dirigen a menores, a personas necesitadas de especial protección o a mujeres víctima de trata”*.

Como afirma CANO PAÑOS⁵⁵, con la redacción del artículo 577 se persigue, al igual que en Derecho comparado, penalizar cualquier forma de apoyo individual o social al fenómeno terrorista.

El artículo 577 del Código Penal queda redactado tras la reforma como sigue:

«1. Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización, grupo o elemento terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo.

En particular son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones, la construcción, acondicionamiento, cesión o utilización de

⁵⁴ GARCÍA SAN PEDRO, J. *Terrorismo: aspectos criminológicos y legales*, Madrid, 1993. Págs. 215-216.

⁵⁵ CANO PAÑOS, M.A. *Estudios sobre el Código Penal reformado. Leyes orgánicas 1/2015 y 2/2015*. Ed. Dykinson. Ed. 1ª 2015, pág. 935 y ss.

alojamientos o depósitos, la ocultación, acogimiento o traslado de personas, la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, la prestación de servicios tecnológicos, y cualquier otra forma equivalente de cooperación o ayuda a las actividades de las organizaciones o grupos terroristas, grupos o personas a que se refiere el párrafo anterior.

Cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas se impondrá la pena prevista en este apartado en su mitad superior. Si se produjera la lesión de cualquiera de estos bienes jurídicos se castigará el hecho como coautoría o complicidad, según los casos.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán a quienes lleven a cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento o adiestramiento, que esté dirigida o que, por su contenido, resulte idónea para incitar a incorporarse a una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo.

Asimismo, se impondrán estas penas a los que faciliten adiestramiento o instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas especialmente adecuados para la comisión de alguno de los delitos del artículo 573, con la intención o conocimiento de que van a ser utilizados para ello.

Las penas se impondrán en su mitad superior, pudiéndose llegar a la superior en grado, cuando los actos previstos en este apartado se hubieran dirigido a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección o a mujeres víctimas de trata con el fin de convertirlas en cónyuges, compañeras o esclavas sexuales de los autores del delito, sin perjuicio de imponer las que además procedan por los delitos contra la libertad sexual cometidos.

3. Si la colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista, o en la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo, se hubiera producido por imprudencia grave se impondrá la pena de prisión de seis a dieciocho meses y multa de seis a doce meses».

Del estudio de la nueva redacción del delito de colaboración con banda terrorista observamos que en el apartado 1 se recoge el tipo básico del delito, cuya pena se mantiene igual a la anterior redacción, e introduce el elemento terrorista que anteriormente no se contemplaba.

En el apartado 2 se recogen las acciones de captación, adiestramiento, y reclutamiento al servicio de organizaciones o fines terroristas, imponiendo una pena agravada en su mitad superior, para los actos que fuesen dirigidos a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección o a mujeres víctimas de trata con el fin de convertirlas en cónyuges, compañeras o esclavas sexuales de los autores del delito. Además, se impondrán las penas que procedan por los delitos contra la libertad sexual cometidos.

En el punto 3 se recoge la comisión de este delito por imprudencia grave, siendo ésta la reforma más importante de este artículo.

2. Concepto y naturaleza jurídica

a) Delito autónomo: Se castigan comportamientos que constituyen participación en actividades de la organización terrorista, sin estar subordinado a las exigencias del principio de accesoriedad. La sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1997 menciona los caracteres del delito, entre ellos el carácter autónomo:

“Autónomo, en el que se castigan conductas que implican participación en actividades de la organización terrorista sin venir subordinados a las exigencias del principio de accesoriedad”⁵⁶.

Esta misma característica es recogida por la jurisprudencia de la Audiencia Nacional:

“es un delito autónomo que supone un adelantamiento de las barreras de protección por razones de política criminal de suerte que, si los actos de colaboración estuvieran relacionados, causalmente, con un hecho delictivo concreto se estaría en el área de la participación en tal delito, nuclear o periférico, pero no el de la colaboración”⁵⁷

⁵⁶ STS de 29 de noviembre de 1997.

⁵⁷ SAN 19/2006 de 21 marzo. ARP 2006\170.

b) Delito de mera actividad: Se perfecciona con el mero cumplimiento de una acción u omisión; el tipo penal solo exige de una acción u omisión, sin que se requiera que dicho comportamiento produzca un resultado y beneficie a la organización terrorista. Con esta figura el legislador está anticipando las barreras de protección penal, lo que se justifica en la importancia de los bienes jurídico que se intenta proteger. Tal y como lo recoge la SAN 19/2006 sección 3ª:

“Es un tipo penal de simple actividad y de peligro abstracto, en cuanto el legislador, en atención a la especial relevancia constitucional de los bienes jurídicos protegidos (la vida, la seguridad de las personas, la paz social), se ha visto compelido a anticipar la barrera de protección penal, recreando una figura delictiva en la que no se exige un resultado o modificación del mundo exterior, por cobrar un especial desvalor el acto en sí”⁵⁸.

c) Delito de peligro abstracto: El legislador anticipa la barrera de protección penal, configurando una figura delictiva en la que no se exige un resultado o modificación del mundo exterior, por cobrar un especial desvalor el acto en sí. En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo cuando en la sentencia 572/2007, de 18 junio, enumera las características del delito de colaboración:

“Que no lleva aparejado así la producción de un peligro efectivo, pero sí una acción apta para producir un peligro al bien jurídico como elemento material integrante del tipo (peligro abstracto)”⁵⁹

Esta misma característica del delito de colaboración es recogida por el Tribunal Constitucional al afirmar que:

“la ley configura el tipo delictivo de colaboración con banda armada como uno de los delitos que la doctrina califica como de «actividad» o de «peligro abstracto», en los que se adelanta la línea de defensa castigando ya el principio de ejecución como delito consumado”⁶⁰.

⁵⁸ STS 2/1997, de 29 de noviembre.

⁵⁹ STS 2/1997, de 29 de noviembre. RJ 1997\8535.

⁶⁰ STC 136/1999 de 20 julio. RTC 1999\136, FJ.26

d) Delito subsidiario o residual: Se sanciona la acción delictiva si no constituye un delito de mayor entidad, convirtiendo el tipo penal en cajón de sastre donde se subsumen los comportamientos de algún modo relacionados con las organizaciones terroristas, que no se lleven a cabo por sus integrantes y redunden en su beneficio.

La SAN 19/2006 -Roj: SAN 624/2006 ECLI: ES:AN: 2006:624- en su FD Segundo, describe las características del delito de colaboración y entre ellas el carácter residual: *“son notas distintivas del delito de colaboración (STS 785/2003), a) su carácter residual respecto del de integración”*⁶¹.

e) Delito de resultado cortado: El autor lleva a cabo el acto de colaboración con la intención de contribuir a la producción de otro resultado, aunque no llegue a producirse.

f) Delito esporádico: El autor del delito de colaboración no realiza una conducta permanente en el tiempo; el delito se consuma en el momento en que se realiza la acción favorecedora de la organización terrorista. Por el contrario, si la conducta fuera repetitiva nos encontraríamos ante un delito de integración en organización terrorista.

g) Delito de estructura abierta: Las conductas subsumibles en el delito de colaboración no constituyen numerus clausus, siendo muy variados los comportamientos que pueden ser encuadrados como favorecedores de los objetivos y fines terroristas; esto genera numerosas dudas a la hora de adaptar ese precepto a los principios de legalidad y seguridad, tal y como sostiene TERRADILLOS BASOCO: *“la nueva normativa no es muy respetuosa con el principio de legalidad, tan esencial al modelo de Estado de Derecho. Los conceptos en torno a los que se construyen los nuevos tipos penales han suscitado dificultades interpretativas y las van a seguir creando”*⁶².

Los problemas se originan por la redacción del artículo 577, la cual es poco precisa, dando como resultado que sean los órganos judiciales los que concreten estas situaciones, atribuyéndole una función que no les corresponde.

⁶¹ SAN 19/2006 Roj: SAN 624/2006 ECLI: ES:AN: 2006:624

⁶² TERRADILLOS BASOCO, J. Terrorismo y Derecho. Cit. Pág.39.

h) Delito doloso: Este tipo de delito se caracteriza por tener el sujeto la conciencia y voluntad de realizar el hecho tipificado objetivamente en una figura delictiva, sabe y quiere realizar la acción, siendo los elementos el conocimiento y la voluntad. Características del delito de colaboración que se recogen en la jurisprudencia del Tribunal Supremo:

“se trata de un delito doloso, es decir, intencional en el sentido de que el autor debe conocer y querer la colaboración que presta a la banda armada, estando incluido el dolo eventual para colmar las exigencias del tipo”⁶³.

“la doctrina y la jurisprudencia han exigido en el cooperador un doble dolo. Debe abarcar, de un lado, el hecho que realiza, o que va a realizar, el autor, cuyo propósito debe conocer en sus aspectos esenciales, y de otro, que su aportación supone una colaboración, lo que implica que el cooperador ha de conocer la finalidad con la que aquella va a ser utilizada por el autor, siendo consciente de que con ella se facilita de alguna forma relevante la ejecución de aquel hecho, al menos mínimamente determinado. Se ha admitido que, en este sentido, es bastante el dolo eventual, de forma que no es preciso que el cooperador oriente su conducta de modo directo a la facilitación del hecho del autor principal cuyo propósito de ejecución conoce”⁶⁴.

Por lo tanto, el autor debe conocer que con su comportamiento favorece las actividades y objetivos de la organización. Esta norma general, se rompe al introducir en el tipo penal la comisión por imprudencia grave (artículo 577.3).

El sujeto que realiza la acción favorecedora debe ser una persona no integrada en la organización terrorista, un “extraneus”. GARCIA PABLOS define al extraneus como “*el tercero ajeno a la organización*”⁶⁵. Cuando la acción es realizada por una persona integrante de la organización, estaría desempeñando las funciones que le son propias en la organización, no cometería el delito de colaboración, su comportamiento estaría subsumido en el artículo 572.2. C.P.

⁶³ STS 480/2009, de 22 de mayo.

⁶⁴ Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia núm. 174/2015 de 14 mayo. RJ 2015\2609

⁶⁵ GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., Asociaciones ilícitas en el Código Penal. Barcelona, 1977. Pág.251

Como dice MESTRE DELGADO, “*Los actos de tal carácter cometidos por los miembros de la organización no significan otra cosa que el desarrollo de una conducta incluida en el concepto de pertenencia a la organización delictiva*”⁶⁶.

Por tanto el colaborador comparte la ideología del grupo terrorista, participa en su estrategia; no obstante se requiere que los sujetos sean extranei a la organización ilícita.

A modo de ejemplo, la ocultación en un piso de personas que han cometido un atentado, con el objeto de eludir la detención por parte de la Policía, cuando esta ocultación es llevada a cabo por un miembro de la organización terrorista, es un acto que le es propio como miembro de la organización; sin embargo, cuando ese acto lo realiza un tercero ajeno a la organización constituiría un acto de colaboración castigado en el artículo 577.1. C.P.

En la redacción anterior a la reforma de la L.O. 2/2015, los actos de colaboración mediante la financiación de las actividades terroristas, podía ser llevados a cabo por una persona física o jurídica. El caso de persona jurídica quedaba recogido en el apartado tercero del artículo 576.bis., siendo responsables sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho, en nombre o por cuenta propia, o por sus subordinados cuando actuaran sin el debido control (artículos 31.bis, 33.7 y 129 CP).

3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este artículo, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad no incluida en el anterior inciso.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis de este Código, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

⁶⁶ MESTRE DELGADO, E. Delincuencia terrorista...cit. Pág.203

Tras la reforma de 2015, la acción queda recogida en el artículo 576.5 como delito de financiación del terrorismo:

“5. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos tipificados en este artículo se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad no incluida en la letra anterior.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33”

VI. REFORMA DEL CÓDIGO PENAL INTRODUCIDA POR LA LEY ORGÁNICA 2/2015 EN RELACIÓN CON EL DELITO DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓN TERRORISTA (ART. 577 CP).

El legislador con esta reforma trata de dar respuesta a un nuevo modelo de terrorismo que amenaza a España y a la comunidad internacional, el terrorismo de corte yihadista.

Esta nueva forma de terrorismo es diferente al padecido históricamente por nuestro país y que habían ejercido en mayor medida las organizaciones terroristas ETA y GRAPO, y para el que se daba una respuesta adecuada en el Código Penal.

El terrorismo yihadista incorpora nuevas formas de agresión, consistentes en nuevos instrumentos de captación, adiestramiento o adoctrinamiento en el odio⁶⁷, que tiene como objetivo todos aquellos que, en su ideario extremista y violento, sean calificados como enemigos. Esta nueva amenaza debe ser combatida por instrumentos jurídicos eficaces.

⁶⁷ JAÉN VALLEJO, M. y PERRINO PÉREZ, A.L. La reforma penal de 2015 (Análisis de las principales reformas introducidas en el Código Penal por las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo), Ed. Dykinson S.L. Madrid, 2015. Pág.189

A continuación pasamos a comentar las modificaciones introducidas en la redacción del artículo 577 del Código Penal.

En el primer párrafo del nuevo artículo 577 se recoge el tipo básico del delito de colaboración con organización o grupo terrorista, incorporando, por exigencia de la nueva definición de terrorismo al elemento terrorista, sin necesidad de probar la pertenencia o colaboración con aquéllas.

En cuanto a las penas, son las mismas contempladas por el artículo 576 en la redacción dada tras la reforma de la L.O. 5/2010 y, como dice CAMPO MORENO⁶⁸, presenta los mismos problemas conceptuales y concursales puestos de manifiesto por la doctrina y sobre los que el Tribunal Supremo no deja de pulir situaciones dudosas; en este sentido destacamos la STS de 4 de noviembre de 2014, núm. 4733/2014, en la que se definen temas concursales entre el delito de colaboración con organización terrorista y el de depósito de armas y explosivos, invocando los principios de especialidad y absorción:

“Cuando se actúa en el seno o en colaboración de una organización terrorista el acopio de medios destructivos no se realiza metódica y selectivamente sino bajo la intención común de dotar a la organización terrorista de la mayor capacidad destructiva posible, por lo que se produce una escalada o progresión delictiva que agrupa toda la reacción punitiva, de tal forma que la totalidad de la conducta reprochable se integraría en el artículo 573 del Código Penal, por el principio de especialidad (artículo 8.1) o de absorción (artículo 8.3), ambos del Código Penal”.

Y que:

“Reducida la conducta reprochable a un delito de colaboración con banda armada por un lado y un delito de depósito de armas y explosivos del artículo 573 del Código Penal, no es posible, dada la naturaleza de los hechos, construir un concurso ideal entre ambos.

Cosa diversa ocurriría si la actitud de colaboración va más allá o excede de la tenencia de explosivos, incluso cuando ésta se lleva a cabo con la misma finalidad

⁶⁸ CAMPO MORENO, J.C. Comentarios a la reforma del Código Penal en materia de terrorismo: La L.O. 2/2015, Tirant Lo Blanch, Valencia 2015, pág. 69

colaboradora. Porque entonces habría una antijuridicidad no cubierta por el tipo penal de tenencia. Porque en tal caso, como dijimos en aquella sentencia:

Nos encontramos ante un concurso real entre la colaboración con banda armada (art. 576 del C.P) y depósito de armas y explosivos con fines terroristas (art. 573 del C.P)”⁶⁹.

El legislador ha incorporado comportamientos nuevos, como el “acogimiento” de persona, que se suman a las ya definidas, como la “ocultación” y el “traslado”, sin que quede claro que es lo que ha querido regular con estos términos, pues estas conductas quedaban englobadas en la cláusula de cierre de cualquier otra forma equivalente de cooperación o ayuda a las actividades terroristas.

El Tribunal Supremo profusamente se ha pronunciado en este sentido, con constantes referencias al delito de colaboración. Por todas, STS núm. 234/2012, de 16 de marzo:

“Hemos dicho -cfr. SSTs 541/2011, 2 de junio y 503/2008, 17 de julio, entre otras- que el tipo objetivo del delito previsto en el art. 576 del CP exige que el acto tenga un significado favorecedor de las actividades de la organización como tal, y en el tipo subjetivo, que el sujeto conozca la existencia de la banda armada, grupo u organización terrorista, y conozca además que el acto que se ejecuta contribuye de alguna forma a sus actividades, bien por la propia significación del mismo o bien porque sepa, al realizarlo, que su ejecución se explica sólo por el favorecimiento de la banda y no por cualquier otra posible actividad relacionada con la misma, aunque ignore las razones por las que es positivo para aquéllos o la medida en que lo es”⁷⁰.

La importancia de la prestación de servicios tecnológicos en la esfera del terrorismo no ha pasado desapercibida al legislador, y, en consecuencia, ha introducido en la actual redacción la expresión “*prestación de servicios tecnológicos*”.

La cláusula de cierre ha sido mejorada, eliminando el concepto de mediación de la anterior redacción; no obstante, el inciso final es más confuso por cuanto, al referirse al ámbito subjetivo, introduce una enumeración redundante. Junto a la organización o grupo,

⁶⁹ STS 754/2014 de 4 noviembre. RJ 2014\5667. FJ. UNDÉCIMO. -2.

⁷⁰ STS 234/2012, de 16 de marzo.

incorpora el elemento terrorista, el denominando lobo solitario⁷¹, terrorista que actúa individualmente, desvinculado de la organización, pero que persigue los mismos fines que ésta y al que no se ha podido probar pertenencia a organización o grupo terrorista, y en lugar de finalizarla redacción con elemento terrorista, vuelve a introducir el grupo equiparándolo a elemento terrorista: *“cualquier otra forma equivalente de cooperación o ayuda a las actividades de las organizaciones o grupos terroristas, grupos o personas a que se refiere el párrafo anterior”*⁷².

El inciso final del párrafo 1º incluye dos subtipos agravados; en el primero se recoge cuando el peligro abstracto, característico del delito de colaboración, se convierte en peligro concreto, castigándose con la pena en su mitad superior.

En el segundo subtipo, la modificación consiste en el cambio de *“Si llegara a ejecutarse el riesgo prevenido”* por *“Si se produjera la lesión de cualquiera de estos bienes jurídicos”*, en referencia, al igual que en la redacción anterior, a la información y vigilancia, y no a los demás actos de colaboración.

El párrafo segundo del apartado 2 prevé las mismas penas que la redacción precedente, para los delitos de colaboración, consistentes en el adiestramiento o instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas especialmente adecuados para la comisión de alguno de los delitos del artículo 573, pero introduce la expresión *“con la intención o conocimiento de que van a ser utilizados para ello.”* Con lo cual solo es posible la comisión de estos delitos en su vertiente dolosa.

En el párrafo final del apartado nº 2 recoge un subtipo agravado castigado con pena mayor (penas en su mitad superior) en los casos en que las conductas tengan como sujeto pasivo grupos vulnerables, *“menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección o a mujeres víctimas de trata con el fin de convertirlas en cónyuges, compañeras o esclavas sexuales de los autores del delito”*.

El apartado nº 3 introduce la modalidad de comisión por imprudencia grave del delito de colaboración, en oposición a la tradicional construcción típica de la estructura dolosa de

⁷¹ CAMPO MORENO, J.C. Comentarios a la reforma del Código Penal ...cit., pág. 71.

⁷² Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 577.1, párrafo segundo.

los delitos de terrorismo. La estructura típica exigía el elemento cognitivo del favorecimiento y de la finalidad perseguida. Era un tipo penal doloso y, por tanto, no era posible la imputación a título de culpa. La doctrina de forma unánime entendía la estructura dolosa donde el dolo abarca la conciencia del acto que se realizaba y la finalidad perseguida⁷³.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo recalcaba de forma clara la estructura de la culpabilidad:

*“no basta la aportación material de elementos de apoyo, se exige, además, por imperativo del principio culpabilístico que configura nuestro sistema penal que el acusado conozca la pertenencia a banda armada de las personas a las que presta su colaboración, es decir que tenga conciencia de que está realizando actos de favorecimiento de los fines y actividades de la organización a la que presta ayuda”*⁷⁴.

Como afirma CAMPO MORENO⁷⁵, el legislador con esta nueva redacción se aparta de la línea consolidada que permitía no penalizar comportamientos que objetivamente favorecían, pero que en los que faltaba el elemento cognitivo y volitivo:

*“si la intención o no es patente, o no se demuestra, no cabe integrar tales ayudas o asistencias en el marco de los delitos de colaboración, ya que la comisión de delitos de intencionalidad, por grave que sean, no rompen los vínculos de parentesco ni amistad ni, por tanto, los deberes morales inherentes a las relaciones más íntimas del parentesco que la ley, en ningún caso, debe deshumanizar”*⁷⁶.

Con ello el legislador hace extensible el tipo penal a comportamientos de favorecimiento por imprudencia grave.

Para determinar la imprudencia grave nos remitimos a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que nos dice que por “*imprudencia grave*” ha de entenderse:

⁷³ GACÍA PABLOS DE MOLINA, A., Asociaciones ilícitas en el Código Penal, Ed. Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1978, págs. 316 y ss.; LAMARCA PEREZ, Tratamiento jurídico del terrorismo Ed. Centro de publicaciones del Ministerio de Justicia, págs. 245 y ss.; CAMPO MORENO, J.C., Represión penal del terrorismo, ya cit., págs. 65 y ss.

⁷⁴ STS de 26 diciembre 1989. RJ 1989\9780.

⁷⁵ CAMPO MORENO, J.C. Comentarios a la reforma del Código Penal ...cit., pág. 73.

⁷⁶ CAMPO MORENO. Represión penal del terrorismo... cit., pág. 69.

“la exigencia de que la imprudencia grave ha de consistir en una omisión de las cautelas más elementales, respetables para el menos diligente de los hombres, así como en una previsibilidad notoria del evento y de sus resultados”⁷⁷.

A mayor abundamiento en la cuestión:

“En cuanto a la diferenciación entre la imprudencia grave y la que no lo es, se decía en la STS nº 1823/2002 (RJ 2002, 10599), que la imprudencia grave "... ha requerido siempre la vulneración de las más elementales normas de cautela o diligencia exigibles en una determinada actividad ", y con parecidos términos se recordaba en la STS nº 537/2005 (RJ 2005, 6547) , que "La jurisprudencia de esta Sala suele considerar grave la imprudencia cuando se han infringido deberes elementales que se pueden exigir al menos diligente de los sujetos. Es temeraria, se ha dicho reiteradamente, cuando supone «un olvido total y absoluto de las más elementales normas de previsión y cuidado». Estas consideraciones adquieren especial relieve cuando la situación de riesgo creado con el comportamiento imprudente afecta a bienes de primer interés, como es la vida de las personas, y cuando se está creando un peligro elevado para dichos bienes sin la adopción de las necesarias medidas de cuidado y control".

Con otras palabras, en la STS nº 1089/2009, antes citada, se argumentaba que:

"... la gravedad de la imprudencia se determina, desde una perspectiva objetiva o externa, con arreglo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia en que incurre el autor, magnitud que se encuentra directamente vinculada al grado de riesgo no permitido generado por la conducta activa del imputado con respecto al bien que tutela la norma penal, o, en su caso, al grado de riesgo no controlado cuando tiene el deber de neutralizar los riesgos que afecten al bien jurídico debido a la conducta de terceras personas o a circunstancias meramente casuales. El nivel de permisión de riesgo se encuentra determinado, a su vez, por el grado de utilidad social de la conducta desarrollada por el autor (a mayor utilidad social mayores niveles de permisión de riesgo). Por último, ha de computarse también la importancia o el valor del bien jurídico amenazado por la conducta imprudente: cuanto mayor valor tenga el bien jurídico amenazado menor será el nivel de riesgo permitido y mayores las exigencias del deber de cuidado. De otra parte, y

⁷⁷ STS 67/2015 de 9 febrero. RJ 2015\667.

*desde una perspectiva subjetiva o interna (relativa al deber subjetivo de cuidado), la gravedad de la imprudencia se dilucidará por el grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo, atendiendo para ello a las circunstancias del caso concreto. De forma que cuanto mayor sea la previsibilidad o cognoscibilidad del peligro, mayor será el nivel de exigencia del deber subjetivo de cuidado y más grave resultará su vulneración"*⁷⁸.

Queda de manifiesto que, con este cambio de rumbo, se consigue que nadie quede sin castigo por falta de elementos probatorios. Ante la dificultad de probar la existencia del dolo en el comportamiento favorecedor, basta que no se haya puesto la diligencia e interés requerido.

Por todo ello podemos concluir, en total apoyo a lo manifestado por CAMPO MORENO⁷⁹, que la nueva regulación del artículo 577 CP representa una de las mayores novedades de la reforma y representa la apertura a la excepcionalidad.

A continuación, se incorpora el esquema del artículo reformado.

1. Conducta tipificada:

Llevar a cabo, recabar o facilitar cualquier acto de colaboración con:

- Las actividades de una organización, grupo o elemento terrorista.
- La finalidad de una organización, grupo o elemento terrorista.
- Para cometer cualquier delito de terrorismo.

2. Actos concretos:

- La información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones;
- La construcción, el acondicionamiento, la cesión o la utilización de alojamientos o depósitos.
- La ocultación, acogimiento o traslado de personas;

⁷⁸ STS 997/2013 de 19 diciembre. RJ 2013\8479.

⁷⁹ CAMPO MORENO, J.C. Comentarios a la reforma del Código Penal ...cit., pág. 75.

- La organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas,
- La prestación de servicios tecnológicos
- Cualquier actividad de adoctrinamiento, captación o adiestramiento que incite a integrarse o a cometer los delitos de terrorismo.
- Facilitar adiestramiento o instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o métodos o técnicas de comisión de delitos de terrorismo.
- Cualquier otra forma equivalente de cooperación o ayuda a las actividades de las organizaciones o grupos terroristas, grupos o personas que a su vez colaboren.

3. Agravación

Mitad superior:

- Cuando la información o vigilancia de personas ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas.
- Como autor o cómplice: Cuando se produjera la lesión de cualquiera de estos bienes jurídicos.
- Cuando se dirijan estas acciones sobre menores de edad, discapacitados o víctimas de trata

4. Imprudencia

Cabe la comisión del delito de colaboración con organización terrorista por imprudencia grave.

VII. ELEMENTOS POSITIVOS DEL TIPO

1.- Parte objetiva:

El delito de colaboración con organización terrorista se encuentra tipificado en el artículo 577 del Código Penal, dentro de la Sección 2ª del Capítulo V, "De los delitos de terrorismo".

En el apartado 1, párrafo segundo, se relacionan los actos concretos que se entienden como colaboración: *la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones, la construcción, acondicionamiento, cesión o utilización de alojamientos o depósitos, la ocultación, acogimiento o traslado de personas, la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, la prestación de servicios tecnológicos.*

A mi juicio, esta relación de comportamientos favorecedores de la actividad terrorista no incluye todas las posibles formas de colaborar con las organizaciones, grupos o elementos terroristas, y prueba de ello es que el legislador introduce la cláusula de cierre "*cualquier otra forma equivalente de cooperación o ayuda*", de tal forma que descarga la tarea de salvar las lagunas de tipificación en los órganos judiciales.

En el apartado 2 el legislador, consciente del aumento y peligrosidad del terrorismo yihadista, ha añadido como modalidad delictiva las actividades de captación, adoctrinamiento y entrenamiento.

En el párrafo segundo del apartado 2 se tipifican los actos consistentes en el adiestramiento o instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas especialmente adecuados para la comisión de alguno de los delitos del artículo 573.

En el último párrafo del apartado 2 dispone el legislador unas penas agravadas para cuando los actos de adoctrinamiento se hubieran dirigido a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección o a mujeres víctimas de trata con el fin de convertirlas en cónyuges, compañeras o esclavas sexuales de los autores del delito.

Y, por último, en el apartado 3 introduce la modalidad del delito de cooperación con organización, grupo o elemento terrorista, por imprudencia grave. El legislador rompe con la tradición asentada en la doctrina y la jurisprudencia, de que el delito de colaboración era un delito doloso, en el que se exigía el conocimiento del hecho y la voluntad de realizarlo.

En cuanto sujeto activo del delito, éste ha de ser un “extraneus”; cuando los actos son cometidos por persona integrada en la organización, dicho delito estaría tipificado como el delito propio de pertenencia a banda terrorista.

Tomando como referencia la Jurisprudencia, la Doctrina que analiza este tipo penal, y siguiendo como modelo la clasificación que elabora MESTRE DELGADO⁸⁰, realizamos una enumeración de las conductas que deben entenderse tipificadas como delito de colaboración con organización o grupo terrorista:

a) Ejecución de actividades propias de la infraestructura material de la organización terrorista.

- Alquilar o facilitar pisos o locales comerciales para la posterior utilización por parte de los integrantes de la organización terrorista. La Audiencia Nacional dictó sentencia por un delito de colaboración con banda armada tipificado en el art 576 del Código Penal, consistente los hechos en alquilar piso para la organización⁸¹ y facilitar alojamiento a los miembros que habían cometido un atentado⁸².

- Alquilar o facilitar⁸³ por cualquier medio vehículos a la organización terrorista, para la utilización de sus componentes.

b) Ejecución de actividades propias de la infraestructura organizativa de la organización terrorista.

- Reivindicar en los medios de comunicación las acciones cometidas por la organización terrorista.

- Servir de “buzón” a los comandos de la organización terrorista⁸⁴.

⁸⁰ MESTRE DELGADO, E. Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional. Cit. Pág. 198 y ss.

⁸¹ SAN 4/2000, de 25 de enero, ROJ 327/2000.

⁸² SAN 12/2003, de 01 abril, ROJ 458/2003.

⁸³ SAN 24/1999, de 24 de junio.

- Portar armas, mensajes o dinero entre la organización terrorista y sus integrantes⁸⁵.

c) Ejecución de actividades propias de la infraestructura informativa del grupo terrorista.

- Recopilar información de posibles objetivos de atentado, así como de personas que estuvieran dispuestas a formar parte de la organización terrorista⁸⁶.

- Tomar fotografías, realizar seguimientos de potenciales víctimas, los medios de transporte empleados, vigilancia de edificios e instalaciones que pudieran ser objetivos de la organización terrorista⁸⁷.

d) Puesta a disposición de la organización terrorista los conocimientos técnicos y medios materiales que pueden ser utilizados por la misma para la consecución de sus fines

- Autorizar a la organización terrorista, la construcción de una cárcel del pueblo (zulo), en la propiedad del colaborador.

- Prestar asesoramiento a los integrantes de la organización terrorista en materia de telecomunicación.

- Proporcionar armas, sustancias explosivas, inflamables, incendiarias o asfixiantes a los autores responsable del atentado.

- Falsificar o elaborar para la organización terrorista copias de DNI o Permisos de conducir.

- Realizar traducciones de instrumentos de comunicación.

- Redactar manuales para la preparación y fabricación de artefactos explosivos, inflamables, incendiarios o inflamables.

⁸⁴ SAN 47/2009.

⁸⁵ SAN 52/2010 de 3 septiembre. JUR 2011\26024.

⁸⁶ SAN 29/2005, de 30 de junio, ROJ 8197/2005.

⁸⁷ SAN 83/2005, de 14 de diciembre, ROJ 5478/2005.

e) Realizar actividades que tengan por objetivo fortalecer la estructura delictiva de la organización terrorista

- Captar, adoctrinar y adiestrar personas que se incorporen a la organización terrorista; esta actividad incluiría:

- Impartir cursos sobre el manejo de armas y explosivos o cualquier sustancia peligrosa susceptible de ser empleada por la organización en futuros atentados.

- Organizar prácticas de entrenamiento terrorista o asistir a ellas.

f) Prestar asistencia, ayuda, cobijo o cualesquiera otros servicios a los integrantes de la organización terrorista que proteja a los mismos de la persecución policial o la represión penal o contribuyan al desarrollo de sus actividades delictivas

- Trasladar a los integrantes de la organización terrorista en automóvil.

- Ayudar a los miembros de la organización terrorista a entrar o salir clandestinamente de España⁸⁸.

- Curar a los integrantes de la organización terrorista heridos en sus acciones.

Quedan fuera del tipo penal las acciones sanitarias realizadas por los profesionales médicos en el ejercicio de sus funciones, estando amparados por una causa de justificación, como es el cumplimiento del deber profesional. Las acciones fuera de la esfera de actuación profesional no son consideradas colaboración, siempre que la asistencia sanitaria esté motivada por el interés humanitario.

- Avisar a los integrantes de la organización terrorista de las operaciones policiales, evitando su detención. El caso más llamativo de este tipo de colaboración es el conocido como caso “Faisán”⁸⁹; como dice MUÑOZ CUESTA⁹⁰, “*lo paradigmático de este caso es como la Audiencia Nacional, y la del Tribunal Supremo condenan a los policías acusados de un delito de revelación de secretos y los absuelven de un delito de colaboración con banda*

⁸⁸ SAN 36/2006, de 24 de julio, ROJ 6479/2006.

⁸⁹ SAN de 16 de octubre de 2013 ROJ. 4053/2013.

⁹⁰ MUÑOZ CUESTA, F.J. Revista Aranzadi Doctrinal núm. 7/2014 parte Tribuna. Editorial Aranzadi, SA, Cizur Menor. 2014.

armada, en especial en este segundo delito la intención de los sujetos es determinante para lo que objetivamente no deja duda y subjetivamente sea un obstáculo para la apreciación de ese delito”.

Comparto la opinión de MUÑOZ CUESTA cuando dice que los policías deberían haber sido condenados por el delito de revelación de secretos y por el de colaboración con organización terrorista, por concurrir el dolo en toda su extensión en ambos delitos.

- Ocultar a los miembros de la organización terrorista⁹¹ o sus vehículos⁹².

g) Ejecución de actividades propias de la infraestructura financiera directa o indirecta de la organización o grupo terrorista

- La aportación de donaciones voluntarias⁹³ a la organización terrorista no se encuentra recogido en el artículo 577 CP; tras la reforma de la L.O. 2/2015 se encuentra tipificado en el artículo 576 CP. como delito de financiación del terrorismo.

Las aportaciones económicas voluntarias a la organización terrorista pueden realizarse de distintas maneras. A título individual, como el pago del impuesto revolucionario, a través de recolectas, rifas, con las huchas situadas en la herriko tabernas o por las inversiones legales que tienen como único objeto contribuir a la financiación de los fines de la organización terrorista.

VIII. ELEMENTOS NEGATIVOS DEL TIPO

Son elementos negativos del tipo las causas de exclusión de la responsabilidad criminal por concurrencia de causas de justificación⁹⁴. Estas causas se encuentran recogidas en el artículo 20 CP: legítima defensa, estado de necesidad, miedo insuperable, cumplimiento del deber y el ejercicio legítimo de un oficio o cargo.

⁹¹ SAN 10/2002, de 11 de mayo, ROJ 8220/2002.

⁹² SAN 40/2000, de 18 de julio, ROJ 5039/2000.

⁹³ SAN 20/2006, de 9 de mayo, ROJ 6284/2006.

⁹⁴ GARCÍA ALBERO, R. La reforma de los delitos de terrorismo (art. 572,573,574,575,576,576bis, 577,578, y 579 CP), en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), La Reforma penal de 2010: Análisis y comentarios, Aranzadi Thomson Reuters., Cizur Menor, Navarra, 2011.

1. Legítima defensa

En el delito de colaboración con organización terrorista no es de aplicación la causa de justificación de legítima defensa, por la propia naturaleza del delito, puesto que no podrá considerarse acto defensivo, la contribución, mediación o cooperación tendente a favorecer los fines y objetivos de la organización terrorista. En estos delitos no se produce una agresión ilegítima previa como exige el art. 20. 4º, primero CP.

2. Estado de necesidad

El estado de necesidad como causa de exención de la responsabilidad criminal se recoge el art. 20. 5º CP. Esta causa de justificación puede darse en los casos de mediación en secuestro⁹⁵, extorsión robo, o pago del impuesto revolucionario.

LAMARCA PÉREZ⁹⁶ sostiene que la causa de justificación de estado de necesidad puede ser aplicada al mediador en un secuestro cuando su labor de mediación se realiza exclusivamente con la intención de ayudar a los familiares de la víctima o promovido por un acto altruista. Primero porque, al realizar una ponderación de los intereses en juego, podemos decir que el mal ocasionado es inferior al que se pretende evitar, como es la vida o integridad física de una persona o el perjuicio a su patrimonio; y segundo, la situación de necesidad no se crea por el mediador.

Los requisitos exigidos para la apreciación de la circunstancia eximente son que la actividad de mediación se desarrolle en el ejercicio de su profesión como abogado, que sea seleccionado para mediar por sus aptitudes y antecedentes profesionales, y que la actividad se adapte a las normas que lo reglamentan⁹⁷.

3. Miedo insuperable

El miedo insuperable como causa de exención de la responsabilidad criminal se recoge en el artículo 20. 6º CP. Exonera de la responsabilidad criminal al sujeto activo del delito, al excluir su culpabilidad o su imputabilidad, basándose en el principio de la no exigibilidad de

⁹⁵ STS 2117/1994 se 5 de diciembre.

⁹⁶ LAMARCA PÉREZ, C. La mediación en detención ilegal: ¿una conducta atípica o justificada? en «Jueces para la democracia, información y debate» nº 20,1993, págs. 51-52.

⁹⁷ LAMARCA PÉREZ, C. La mediación en detención ilegal: ¿una conducta atípica o justificada? cit., pág. 62.

otra conducta distinta a la realizada. El miedo ha de ser insuperable desde la perspectiva del hombre medio ideal, la amenaza debe ser real, efectiva y acreditada, seria e inminente y de intensidad que disminuya notablemente la capacidad efectiva del sujeto⁹⁸. La inexistencia de estos presupuestos determinaría la no aplicación de la eximente, y la concurrencia tan sólo de alguno de ellos daría como resultado la aplicación de una eximente incompleta⁹⁹.

El pago del llamado impuesto revolucionario es un acto de colaboración con organización terrorista, en él deben apreciarse el elemento subjetivo del tipo entendido como el dolo de cooperar, ayudar, mediar, o financiar a la organización terrorista, es decir, que la actuación sea eficaz e idónea para el favorecimiento de los objetivos y actividades de la organización terrorista¹⁰⁰.

En consecuencia, sin la existencia de ambos requisitos, el pago del impuesto revolucionario es atípico, a pesar de haberse realizado una conducta objetivamente antijurídica.

4. Cumplimiento de un deber, cargo u oficio

La eximente de cumplimiento del deber se encuentra recogida en el artículo 20. 7º CP. y es de aplicación en los delitos de colaboración con organización terrorista para los casos de agentes infiltrados en la organización. Dichos agentes tienen como objetivo obtener información tendente a la detención de los integrantes de la organización terrorista y frustrar futuras acciones.

La eximente de ejercicio legítimo de oficio o cargo se aplica a los comportamientos que, realizados fuera del ámbito profesional, son constitutivos de delito, pero que, dentro del mismo, son reconocidos por el Derecho. Como ejemplo de estos casos encontramos el médico que, en el ejercicio de su profesión, cura a un miembro de la organización terrorista.

No existen condenas por delito de colaboración con organización terrorista por situaciones de este tipo, claro está, siempre que quienes actúan dispongan de la titulación

⁹⁸ STS 20/2011 de 1 de junio.

⁹⁹ STS 659/2012 de 26 de julio, ROJ STS 5970/2012. El Tribunal Supremo absuelve a las recurrentes del delito de colaboración con organización terrorista que habían sido condenadas por la AN al aplicar eximente incompleta.

¹⁰⁰ CAPITA REMEZAL, M. *Análisis de la legislación penal antiterrorista*. Ed. Colex, Madrid, 2008, pág. 148.

legal exigida para el ejercicio de la profesión no contravengan ninguna ley o disposición expresa acerca del ejercicio de este oficio y actúen con la diligencia debida.

5. Inexigibilidad de otra conducta

Nos encontramos con una eximente supralegal y tendría aplicación en los delitos de colaboración con organización terrorista cuando una persona auxilia a un miembro de la organización por motivos altruistas o humanitarios, suministrándole alimentos. Este supuesto ha sido considerado por la Audiencia Nacional como justificado al considerar estos comportamientos de carácter humanitario.

Asimismo, se podría aplicar la eximente al cónyuge que, por sumisión a las decisiones del otro, y sin ánimo de colaborar con la organización terrorista, se pliega a las exigencias de su pareja, con el fin de mantener el afecto y estabilidad de la familia. La Audiencia Nacional en estos casos ha apreciado que el elemento culpabilístico en estas acciones ha disminuido.

IX. ITER CRIMINIS

El iter criminis del delito de colaboración con organización terrorista está compuesto por una fase interna, en la que el autor tiene la idea y la voluntad de consumarla, y una fase externa como manifestación de esa voluntad mediante la realización de actos preparatorios punibles (provocación, proposición, conspiración) y actos de ejecución del delito (tentativa y consumación).

1. Actos preparatorios punibles

Se entienden por actos preparatorios los actos externos que se dirigen a facilitar la realización posterior del delito en cuestión. Se distinguen de los actos ejecutivos en que estos últimos implican dar comienzo a la realización del hecho típico. En Derecho español solo se castigan los que expresamente vengan recogidos en la regulación concreta del delito.

Los actos ejecutivos del delito de cooperación con organización terrorista se encuentran tipificados en el artículo 17.1, 17.2 y 579 CP.

2. Actos ejecutivos

Actos ejecutivos¹⁰¹ son aquellos con los que se da comienzo a la ejecución de la conducta típica prevista por el tipo penal. Dichos actos tienden a la realización del delito, pero en ocasiones, por distintos motivos, no se consigue consumar el delito, surgiendo así diferencias entre aquellas conductas típicas que han conseguido la lesión del bien jurídico protegido que se proponían, como delito consumado, de aquellas que han comenzado la ejecución, pero no han alcanzado la lesión deseada, dando lugar a la tentativa de delito.

X. PENALIDAD

El legislador español, a través del vigente Código Penal en su artículo 577, ha establecido distintas consecuencias penales para el delito de colaboración con grupo, organización terrorista o elemento terrorista. Dichas reacciones penales podrán ser privativas de libertad, multas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias.

1. Penas privativas de libertad

La libertad es uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución (artículo 17: *“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”*). En consecuencia, la pena privativa de libertad es la sanción prevista en la Ley (Ley Orgánica por verse afectado un derecho fundamental) impuesta a una persona que ha cometido un acto tipificado como delito, y declarado culpable por un tribunal en un proceso público celebrado con todas las garantías.

La pena privativa de libertad consiste en la reclusión del condenado en un establecimiento penitenciario en el que permanece privado, en mayor o menor medida, de su libertad y sometido a un específico régimen de vida. Dichas penas “estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados” como establece

¹⁰¹ COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTON, T. Derecho penal Parte General, 5ª Edición Valencia, 1999. Págs. 726-730.

la Constitución española en el artículo 25.2 y recoge la Ley Orgánica General Penitenciaria en su artículo 1.

El Código Penal establece en el artículo 577.1 una pena tipo de 5 a 10 años de prisión para quienes lleven a cabo, recaben o faciliten cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización, grupo o elemento terrorista.

El artículo 577.1, párrafo tercero, agrava la pena, correspondiendo aplicarla en su mitad superior, de 7 años y 6 meses a 10 años, atendiendo a la regla contenida en el artículo 66 del Código penal. Prevé un subtipo agravado para cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de éstas. Si se produjera la lesión de cualquiera de estos bienes jurídicos se castigará el hecho como coautoría o complicidad, según los casos.

2. Multas

La pena de multa se encuentra regulada en el artículo 50 del Código Penal; es una medida impuesta al condenado consistente en una sanción pecuniaria, que se impondrá por el sistema de días-multa, excepto en los casos que la Ley disponga otra cosa. En cuanto a la extensión, variará desde el mínimo de diez días hasta un máximo de dos años para personas físicas y hasta el máximo de cinco años cuando se imponga a persona jurídica. La cuantía diaria estará comprendida entre un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, excepto en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración por meses o por años, se entenderá que los meses son de treinta días y los años de trescientos sesenta.

Los Jueces o Tribunales determinarán motivadamente la extensión de la pena dentro de los límites establecidos para cada delito y según las reglas del capítulo II de este Título. Igualmente, fijarán en la sentencia el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo.

El tribunal, por causa justificada, podrá autorizar el pago de la multa dentro de un plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez o en los

plazos que se determinen. En este caso, el impago de dos de ellos determinará el vencimiento de los restantes.

El tribunal impondrá una multa de dieciocho a veinticuatro meses para el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización, grupo o elemento terrorista.

Cuando la cooperación terrorista consista en labores de información o vigilancia de personas y se ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas, se impondrá la pena de multa prevista en su mitad superior.

Asimismo las penas de multa se impondrán en su mitad superior, pudiéndose llegar a la superior en grado, cuando los actos captación, adoctrinamiento o adiestramiento, se hubieran dirigido a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección o a mujeres víctimas de trata con el fin de convertirlas en cónyuges, compañeras o esclavas sexuales de los autores del delito.

Cuando la colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista se hubiera producido por imprudencia grave la pena de multa correspondiente será de seis a doce meses.

3. Medidas de seguridad

Son medidas de seguridad las impuestas al condenado por un órgano jurisdiccional en el marco de un proceso penal. La finalidad principal es la prevención del delito y la corrección del sujeto.

En el artículo 579 bis del CP se recoge la medida de seguridad, común para todos los delitos comprendidos en el capítulo de las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo, consistente en aplicar la libertad vigilada de cinco a diez años, y de uno a cinco años si la pena privativa de libertad fuera menos grave.

No obstante, el legislador deja al arbitrio del juzgador lo anterior, cuando se trate de un solo delito que no sea grave, y su autor hubiere delinquido por primera vez, pudiendo el tribunal imponer o no la medida de libertad vigilada, en atención a su menor peligrosidad.

Asimismo, el artículo 579 bis del CP recoge las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, al responsable de los delitos previstos en este Capítulo.

4. Consecuencias accesorias

Son medidas específicas encaminadas a paliar los efectos del delito, consistiendo en el decomiso de los bienes y efectos utilizados en la comisión del delito. Se encuentran recogidas en el Título VI (“De las consecuencias accesorias”) del Libro I del Código, y en relación con los delitos de terrorismo, en el artículo 127 bis. 1.q CP.

XI. CONCLUSIONES

1ª. Tanto en el ámbito internacional como en el nacional han existido muchas dificultades para encontrar un consenso en la definición del terrorismo, sobre todo cuando los intereses en juego son económicos o políticos, lo que ha dificultado la tipificación internacional de estos delitos, que hicieran eficaz la lucha contra el terrorismo.

2ª. A pesar de la conclusión anterior y tal vez influido por el aumento del terrorismo internacional, el Derecho Internacional ha elaborado instrumentos jurídicos que han contribuido a la mejora en la tipificación de las conductas terroristas, destacando las Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.

3ª. En el ámbito del Derecho Comunitario, las Directivas y Decisiones Marco de la Unión Europea han contribuido a la unificación de las legislaciones penales de sus países miembros, lo que redundará en una eficaz lucha contra el terrorismo.

4ª. En el artículo 577 del vigente Código Penal se tipifica y castiga el delito de colaboración con organización terrorista; en él se castiga la colaboración eficaz e idónea con la organización o grupo terrorista en la consecución de sus objetivos, así como en la realización de sus actividades.

5ª. El bien jurídico protegido en el delito de colaboración con organización terrorista es el orden público y la paz social, tratándose de un bien jurídico colectivo. La agresión puede manifestarse de forma individual mediante lesión a la vida, la integridad física, la libertad, o el patrimonio.

6ª. El sujeto activo del delito de colaboración terrorista es un extraneus a la organización con la que colabora; de no ser así sus comportamientos serían castigados como integrante de organización terrorista.

7ª. El sujeto pasivo del delito terrorista y, en consecuencia, del delito de colaboración, es la víctima del terrorismo que ha visto cómo sus bienes se ven afectados por la actividad terrorista.

8ª. El delito de colaboración con organización terrorista se define por los siguientes caracteres: es un delito autónomo, residual o subsidiario, de estructura abierta, de mera actividad y de peligro abstracto.

9ª. Es un delito que anticipa las barreras de protección penal y ello es así por la importancia de los bienes jurídicos que intenta proteger.

10ª. Es un delito doloso, pues el autor de la colaboración debe conocer la militancia en una organización terrorista de la persona ayudada, ser consciente de la antijuridicidad de la organización, debe conocer que con sus actos favorece los objetivos e intereses de la organización terrorista y tener la voluntad de prestar su ayuda para conseguir los fines de la organización.

11ª. La jurisprudencia marca las diferencias existentes entre el delito de pertenencia o integración en la organización terrorista de la colaboración. Para que se califique como delito de integración o pertenencia se exigen los requisitos de estructura compleja con el objetivo de pervertir el orden democrático, la participación debe ir más allá de lo episódico, se aceptan los fines y se realizan actividades que ayudan a dicho objetivo. La colaboración debe ser relevante y deben precisarse las acciones en que consiste.

12ª. El legislador ha introducido en el artículo 577.3 CP. la comisión del delito de cooperación con organización terrorista por imprudencia grave; en mi opinión esta

modificación es un error, se contradice con la estructura delictiva que exige un vínculo doloso entre el comportamiento favorecedor y los fines terroristas, si basta con la imprudencia grave se estarían castigando comportamientos que implican colaboración objetiva. Por ello propongo la eliminación de este apartado.

ANEXO

CUADRO COMPARATIVO

LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.

LEY ORGÁNICA 5/2010, DE 22 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.

LEY ORGÁNICA 2/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO.

[Los datos para la elaboración del presente cuadro comparativo han sido obtenidos del Boletín Oficial del Estado]

	Texto original, publicado el 24/11/1995, en vigor a partir del 24/05/1996.	Modificación publicada el 23/06/2010, en vigor a partir del 23/12/2010	Última actualización, publicada el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/07/2015.
ARTICULO 571	<p>Sección 2.ª De los delitos de terrorismo</p> <p>Artículo 571</p> <p>Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, cometan los delitos de estragos o de incendios tipificados en los artículos 346 y 351, respectivamente, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesión para la vida, integridad física o salud de las personas.</p>	<p>Sección 1.ª De las organizaciones y grupos terroristas</p> <p>Artículo 571</p> <p>1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren o dirigieren una organización o grupo terrorista serán castigados con las penas de prisión de ocho a catorce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho a quince años.</p> <p>2. Quienes participaren activamente en la organización o grupo, o formaren parte de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis a doce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a catorce.</p> <p>3. A los efectos de este Código, se considerarán organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que, reuniendo las características respectivamente establecidas en el</p>	<p>Sección 1.ª De las organizaciones y grupos terroristas</p> <p>Artículo 571</p> <p>A los efectos de este Código se considerarán organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que, reuniendo las características respectivamente establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 bis y en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto la comisión de alguno de los delitos tipificados en la sección siguiente.</p>

ARTICULO 571		párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 bis) y en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública mediante la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en la Sección siguiente.	
ARTICULO 572	<p>Artículo 572.</p> <p>1. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas descritos en el artículo anterior, atentaren contra las personas, incurrirán:</p> <p>1.º En la pena de prisión de veinte a treinta años si causaran la muerte de una persona.</p> <p>2.º En la pena de prisión de quince a veinte años si causaran lesiones de las previstas en los artículos 149 y 150 o secuestraran a una persona.</p> <p>3.º En la pena de prisión de diez a quince años si</p>	<p>Sección 2.ª De los delitos de terrorismo</p> <p>Artículo 572</p> <p>1. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con organizaciones o grupos terroristas cometan los delitos de estragos o de incendios tipificados en los artículos 346 y 351, respectivamente, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesión para la vida, integridad física o salud de las personas.</p> <p>2. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con las organizaciones o grupos terroristas atentaren contra las personas, incurrirán:</p>	<p>Sección 2.ª De los delitos de terrorismo</p> <p>Artículo 572</p> <p>1. Quienes promovieran, constituyeran, organizaran o dirigieran una organización o grupo terrorista serán castigados con las penas de prisión de ocho a catorce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho a quince años.</p> <p>2. Quienes participaran activamente en la organización o grupo, o formaran parte de ellos, serán castigados con las penas de prisión de seis a doce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a catorce años.</p>

ARTÍCULO 572	<p>causaran cualquier otra lesión o detuvieran ilegalmente, amenazaran o coaccionaran a una persona.</p> <p>2. Si los hechos se realizaran contra las personas mencionadas en el apartado 2 del artículo 551 o contra miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías de las Comunidades Autónomas o de los Entes locales, se impondrá la pena en su mitad superior.</p>	<p>1.º En la pena de prisión de veinte a treinta años si causaran la muerte de una persona.</p> <p>2.º En la pena de prisión de quince a veinte años si causaran lesiones de las previstas en los artículos 149 y 150 o secuestraran a una persona.</p> <p>3.º En la pena de prisión de diez a quince años si causaran cualquier otra lesión o detuvieran ilegalmente, amenazaran o coaccionaran a una persona.</p> <p>3. Si los hechos se realizaran contra las personas mencionadas en el apartado 2 del artículo 551 o contra miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías de las Comunidades Autónomas o de los Entes locales, se impondrá la pena en su mitad superior.</p>	
ARTÍCULO 573	<p>Artículo 573.</p> <p>El depósito de armas o municiones o la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables,</p>	<p>Artículo 573.</p> <p>El depósito de armas o municiones o la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables,</p>	<p>Artículo 573.</p> <p>1. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la</p>

ARTÍCULO 573	<p>incendarios o asfixiantes, o de sus componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados, serán castigados con la pena de prisión de seis a diez años cuando tales hechos sean cometidos por quienes pertenezcan, actúen al servicio o colaboren con las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas descritos en los artículos anteriores.</p>	<p>incendarios o asfixiantes, o de sus componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados, serán castigados con la pena de prisión de seis a diez años cuando tales hechos sean cometidos por quienes pertenezcan, actúen al servicio o colaboren con las organizaciones o grupos terroristas descritos en los artículos anteriores.</p>	<p>integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:</p> <p>1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.</p> <p>2.ª Alterar gravemente la paz pública.</p> <p>3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.</p> <p>4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.</p>
---------------------	---	---	---

ARTÍCULO 573			<p>2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior.</p> <p>3. Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los delitos tipificados en este Capítulo.</p>
ARTÍCULO 573 BIS			<p>Artículo 573 bis.</p> <p>1. Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior serán castigados con las siguientes penas:</p> <p>1.ª Con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este Código si se causara la muerte de una persona.</p> <p>2.ª Con la de prisión de veinte a veinticinco años cuando, en los casos de secuestro o detención ilegal, no se dé razón del paradero de la persona.</p> <p>3.ª Con la de prisión de quince a veinte años si se causara un aborto del artículo 144, se produjeran lesiones de las tipificadas en los artículos 149, 150, 157 o 158, el secuestro de una persona, o estragos o</p>

<p>ARTÍCULO 573 BIS</p>			<p>incendio de los previstos respectivamente en los artículos 346 y 351.</p> <p>4.^a Con la de prisión de diez a quince años si se causara cualquier otra lesión, o se detuviera ilegalmente, amenazara o coaccionara a una persona.</p> <p>5.^a Y con la pena prevista para el delito cometido en su mitad superior, pudiéndose llegar a la superior en grado, cuando se tratase de cualquier otro de los delitos a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior.</p> <p>2. Las penas se impondrán en su mitad superior si los hechos se cometieran contra las personas mencionadas en el apartado 3 del artículo 550 o contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas o contra empleados públicos que presten servicio en instituciones penitenciarias.</p> <p>3. Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 2 del artículo anterior se castigarán con la pena superior en grado a la respectivamente prevista en los correspondientes</p>
------------------------------------	--	--	--

			<p>artículos.</p> <p>4. El delito de desórdenes públicos previsto en el artículo 557 bis, así como los delitos de rebelión y sedición, cuando se cometan por una organización o grupo terrorista o individualmente pero amparados en ellos, se castigarán con la pena superior en grado a las previstas para tales delitos.</p>
ARTÍCULO 574	<p>Artículo 574.</p> <p>Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, cometan cualquier otra infracción con alguna de las finalidades expresadas en el artículo 571, serán castigados con la pena señalada al delito o falta ejecutados en su mitad superior.</p>	<p>Artículo 574</p> <p>Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con organizaciones o grupos terroristas, cometan cualquier otra infracción con alguna de las finalidades expresadas en el apartado 3 del artículo 571, serán castigados con la pena señalada al delito o falta ejecutados en su mitad superior.</p>	<p>Artículo 574</p> <p>1. El depósito de armas o municiones, la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados, serán castigados con la pena de prisión de ocho a quince años cuando los hechos se cometan con cualquiera de las finalidades expresadas en el apartado 1 del artículo 573.</p> <p>2. Se impondrá la pena de diez a veinte años de prisión cuando se trate de armas, sustancias o</p>

ARTÍCULO 574			<p>aparatos nucleares, radiológicos, químicos o biológicos, o cualesquiera otros de similar potencia destructiva.</p> <p>3. Serán también castigados con la pena de diez a veinte años de prisión quienes, con las mismas finalidades indicadas en el apartado 1, desarrollen armas químicas o biológicas, o se apoderen, posean, transporten, faciliten a otros o manipulen materiales nucleares, elementos radioactivos o materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes.</p>
ARTÍCULO 575	<p>Artículo 575.</p> <p>Los que, con el fin de allegar fondos a las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas señalados anteriormente, o con el propósito de favorecer sus finalidades, atentaren contra el patrimonio, serán castigados con la pena superior en grado a la que correspondiere por el delito cometido, sin perjuicio de las que proceda imponer conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente por el acto de colaboración.</p>	<p>Artículo 575</p> <p>Los que, con el fin de allegar fondos a las organizaciones o grupos terroristas señalados anteriormente, o con el propósito de favorecer sus finalidades, atentaren contra el patrimonio, serán castigados con la pena superior en grado a la que correspondiere por el delito cometido, sin perjuicio de las que proceda imponer conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente por el acto de colaboración.</p>	<p>Artículo 575</p> <p>1. Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años quien, con la finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en este Capítulo, reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate, o en técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o específicamente destinados a facilitar la comisión de alguna de tales infracciones.</p>

<p>ARTÍCULO 575</p>			<p>2. Con la misma pena se castigará a quien, con la misma finalidad de capacitarse para cometer alguno de los delitos tipificados en este Capítulo, lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior.</p> <p>Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Los hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español.</p> <p>Asimismo se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a la</p>
----------------------------	--	--	---

ARTICULO 575			<p>incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines.</p> <p>3. La misma pena se impondrá a quien, para ese mismo fin, o para colaborar con una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo, se traslade o establezca en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista.</p>
ARTÍCULO 576	Artículo 576. <p>1. Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite, cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista.</p> <p>2. Son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones; la construcción, el acondicionamiento, la cesión o la utilización de alojamientos o depósitos; la</p>	Artículo 576 <p>1. Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista.</p> <p>2. Son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones; la construcción, el acondicionamiento, la cesión o la utilización de alojamientos o depósitos; la ocultación o traslado de personas vinculadas</p>	Artículo 576 <p>1. Será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años y multa del triple al quíntuplo de su valor el que, por cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra actividad con bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo.</p> <p>2. Si los bienes o valores se pusieran efectivamente a disposición del</p>

<p>ARTÍCULO 576</p>	<p>ocultación o traslado de personas vinculadas a las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas; la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, y, en general, cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.</p> <p>Cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas, se impondrá la pena prevista en el apartado 1, en su mitad superior. Si llegara a ejecutarse el riesgo prevenido, se castigará el hecho como coautoría o complicidad, según los casos.</p>	<p>a organizaciones o grupos terroristas; la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, y, en general, cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas organizaciones o grupos terroristas.</p> <p>Cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas, se impondrá la pena prevista en el apartado 1 en su mitad superior. Si llegara a ejecutarse el riesgo prevenido, se castigará el hecho como coautoría o complicidad, según los casos.</p> <p>3. Las mismas penas previstas en el número 1 de este artículo se impondrán a quienes lleven a cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento, adiestramiento o formación, dirigida a la incorporación de otros a una organización o grupo terrorista o a la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en</p>	<p>responsable del delito de terrorismo, se podrá imponer la pena superior en grado. Si llegaran a ser empleados para la ejecución de actos terroristas concretos, el hecho se castigará como coautoría o complicidad, según los casos.</p> <p>3. En el caso de que la conducta a que se refiere el apartado 1 se hubiera llevado a cabo atentando contra el patrimonio, cometiendo extorsión, falsedad documental o mediante la comisión de cualquier otro delito, éstos se castigarán con la pena superior en grado a la que les corresponda, sin perjuicio de imponer además la que proceda conforme a los apartados anteriores.</p> <p>4. El que estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la autoridad en la prevención de las actividades de financiación del terrorismo dé lugar, por imprudencia grave en el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no sea detectada o impedida cualquiera de las conductas descritas en el apartado 1 será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista en</p>
----------------------------	--	--	---

ARTÍCULO 576		este Capítulo.	<p>él.</p> <p>5. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos tipificados en este artículo se le impondrán las siguientes penas:</p> <p>a) Multa de dos a cinco años si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.</p> <p>b) Multa de uno a tres años si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad no incluida en la letra anterior.</p> <p>Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.</p>
ARTICULO 576 BIS	Artículo 576 Bis	<p>Artículo 576 Bis</p> <p>Artículo 576 bis.</p> <p>1. El que por cualquier medio, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en</p>	Artículo 576 Bis

<p>ARTICULO 576 BIS</p>		<p>todo o en parte, para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo o para hacerlos llegar a una organización o grupo terroristas, será castigado con penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses.</p> <p>Si los fondos llegaran a ser empleados para la ejecución de actos terroristas concretos, el hecho se castigará como coautoría o complicidad, según los casos, siempre que le correspondiera una pena mayor.</p> <p>2. El que estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la autoridad en la prevención de las actividades de financiación del terrorismo dé lugar, por imprudencia grave en el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no sea detectada o impedida cualquiera de las conductas descritas en el apartado primero de este artículo, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista en él.</p> <p>3. Cuando de acuerdo con lo establecido en</p>	
--------------------------------	--	--	--

ARTICULO 576 BIS		<p>el artículo 31 bis de este Código una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este artículo, se le impondrán las siguientes penas:</p> <p>a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.</p> <p>b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad no incluida en el anterior inciso.</p> <p>Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis de este Código, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.</p>	
ARTÍCULO 577	<p>Artículo 577.</p> <p>Los que, sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, cometieren</p>	<p>Artículo 577</p> <p>Los que, sin pertenecer a organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, o la de contribuir a estos fines atemorizando a los</p>	<p>Artículo 577</p> <p>1. Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una</p>

<p>ARTÍCULO 577</p>	<p>homicidios, lesiones de las tipificadas en los artículos 149 ó 150, detenciones ilegales, secuestros, amenazas o coacciones contra las personas, o llevaren a cabo cualesquiera delitos de incendios, estragos o tenencia, tráfico y depósitos de armas o municiones, serán castigados con la pena que corresponda al hecho cometido, en su mitad superior.</p>	<p>habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social, político o profesional, cometieren homicidios, lesiones de las tipificadas en los artículos 147 a 150, detenciones ilegales, secuestros, amenazas o coacciones contra las personas, o llevaren a cabo cualesquiera delitos de incendios, estragos, daños de los tipificados en los artículos 263 a 266, 323 ó 560, o tenencia, fabricación, depósito, tráfico, transporte o suministro de armas, municiones o sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, serán castigados con la pena que corresponda al hecho cometido en su mitad superior.</p>	<p>organización, grupo o elemento terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo.</p> <p>En particular son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones, la construcción, acondicionamiento, cesión o utilización de alojamientos o depósitos, la ocultación, acogimiento o traslado de personas, la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, la prestación de servicios tecnológicos, y cualquier otra forma equivalente de cooperación o ayuda a las actividades de las organizaciones o grupos terroristas, grupos o personas a que se refiere el párrafo anterior.</p> <p>Cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas se impondrá la pena prevista en este apartado en su mitad superior. Si se produjera la lesión de cualquiera de estos bienes jurídicos</p>
----------------------------	--	---	--

<p>ARTÍCULO 577</p>			<p>se castigará el hecho como coautoría o complicidad, según los casos.</p> <p>2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán a quienes lleven a cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento o adiestramiento, que esté dirigida o que, por su contenido, resulte idónea para incitar a incorporarse a una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo.</p> <p>Asimismo se impondrán estas penas a los que faciliten adiestramiento o instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas especialmente adecuados para la comisión de alguno de los delitos del artículo 573, con la intención o conocimiento de que van a ser utilizados para ello.</p> <p>Las penas se impondrán en su mitad superior, pudiéndose llegar a la superior en grado, cuando los actos previstos en este apartado se hubieran</p>
----------------------------	--	--	---

ARTÍCULO 577			<p>dirigido a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección o a mujeres víctimas de trata con el fin de convertirlas en cónyuges, compañeras o esclavas sexuales de los autores del delito, sin perjuicio de imponer las que además procedan por los delitos contra la libertad sexual cometidos.</p> <p>3. Si la colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista, o en la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo, se hubiera producido por imprudencia grave se impondrá la pena de prisión de seis a dieciocho meses y multa de seis a doce meses.</p>
ARTÍCULO 578	<p>Artículo 578.</p> <p>La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 571 a 577, se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los hechos previstos en los artículos anteriores.</p>	<p>Artículo 578.</p> <p>El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o</p>	<p>Artículo 578</p> <p>1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará</p>

<p>ARTÍCULO 578</p>		<p>humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años. El Juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que el mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57 de este Código.</p>	<p>con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57.</p> <p>2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información.</p> <p>3. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.</p> <p>4. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos o cualquier otro soporte</p>
----------------------------	--	---	---

ARTÍCULO 578			<p>por medio del que se hubiera cometido el delito. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación se acordará la retirada de los contenidos.</p> <p>Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos accesibles a través de internet o de servicios de comunicaciones electrónicas, el juez o tribunal podrá ordenar la retirada de los contenidos o servicios ilícitos.</p> <p>Subsidiariamente, podrá ordenar a los prestadores de servicios de alojamiento que retiren los contenidos ilícitos, a los motores de búsqueda que supriman los enlaces que apunten a ellos y a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que impidan el acceso a los contenidos o servicios ilícitos siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:</p> <p>a) Cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y a la relevancia de la información y necesaria para evitar su difusión.</p>
---------------------	--	--	--

ARTÍCULO 578			<p>b) Cuando se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a los que se refieren los apartados anteriores.</p> <p>5. Las medidas previstas en el apartado anterior podrán también ser acordadas por el juez instructor con carácter cautelar durante la instrucción de la causa.</p>
ARTÍCULO 579	<p>Artículo 579.</p> <p>En los delitos previstos en esta sección, los Jueces y Tribunales, razonándolo en sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito de que se trate, cuando el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se presente a las autoridades confesando los hechos en que haya participado y además colabore activamente con éstas para impedir la producción del delito o coadyuve eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de bandas armadas,</p>	<p>Artículo 579</p> <p>1. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 571 a 578 se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los hechos previstos en los artículos anteriores.</p> <p>Cuando no quede comprendida en el párrafo anterior o en otro precepto de este Código que establezca mayor pena, la distribución o difusión pública por cualquier medio de mensajes o consignas dirigidos a provocar, alentar o favorecer la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, generando o incrementando el riesgo de su efectiva</p>	<p>Artículo 579</p> <p>1. Será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista para el delito de que se trate el que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad o que, por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este Capítulo.</p> <p>2. La misma pena se impondrá al que, públicamente o ante una concurrencia de personas, incite a otros a la comisión de alguno de los delitos de este Capítulo, así como a quien solicite a otra persona que los cometa.</p> <p>3. Los demás actos de provocación, conspiración y proposición para cometer alguno de los</p>

<p>ARTÍCULO 579</p>	<p>organizaciones o grupos terroristas a los que haya pertenecido o con los que haya colaborado.</p>	<p>comisión, será castigada con la pena de seis meses a dos años de prisión.</p> <p>2. Los responsables de los delitos previstos en este Capítulo, sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, serán también castigados con la pena de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.</p> <p>3. A los condenados a pena grave privativa de libertad por uno o más delitos comprendidos en este Capítulo se les impondrá además la medida de libertad vigilada de cinco a diez años, y de uno a cinco años si la pena privativa de libertad fuera menos grave. No obstante lo anterior, cuando se trate de un solo delito que no sea grave cometido por un delincuente primario, el Tribunal podrá imponer o no la</p>	<p>delitos regulados en este Capítulo se castigarán también con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda respectivamente a los hechos previstos en este Capítulo.</p> <p>4. En los casos previstos en este precepto, los jueces o tribunales podrán adoptar las medidas establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo anterior.</p>
----------------------------	--	--	---

<p>ARTÍCULO 579</p>		<p>medida de libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor.</p> <p>4. En los delitos previstos en esta sección, los jueces y tribunales, razonándolo en sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito de que se trate, cuando el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se presente a las autoridades confesando los hechos en que haya participado, y además colabore activamente con éstas para impedir la producción del delito o coadyuve eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de organizaciones o grupos terroristas a los que haya pertenecido o con los que haya colaborado.</p>	
----------------------------	--	---	--

ARTÍCULO 579 BIS			<p>Artículo 579 bis</p> <p>1. El responsable de los delitos previstos en este Capítulo, sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, será también castigado, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente, con las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia.</p> <p>2. Al condenado a pena grave privativa de libertad por uno o más delitos comprendidos en este Capítulo se le impondrá además la medida de libertad vigilada de cinco a diez años, y de uno a cinco</p>

<p>ARTÍCULO 579 BIS</p>			<p>años si la pena privativa de libertad fuera menos grave. No obstante lo anterior, cuando se trate de un solo delito que no sea grave, y su autor hubiere delinquido por primera vez, el tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada, en atención a su menor peligrosidad.</p> <p>3. En los delitos previstos en este Capítulo, los jueces y tribunales, razonándolo en sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada para el delito de que se trate, cuando el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas, se presente a las autoridades confesando los hechos en que haya participado y colabore activamente con éstas para impedir la producción del delito, o coadyuve eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de organizaciones, grupos u otros elementos terroristas a los que haya pertenecido o con los que haya colaborado.</p>
--------------------------------	--	--	--

ARTÍCULO 579 BIS			4. Los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, podrán imponer también la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en este Capítulo para el delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.
ARTÍCULO 580	Artículo 580. En todos los delitos relacionados con la actividad de las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, la condena de un Juez o Tribunal extranjero será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de aplicación de la agravante de reincidencia.	Artículo 580 En todos los delitos relacionados con la actividad de las organizaciones o grupos terroristas, la condena de un Juez o Tribunal extranjero será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de aplicación de la agravante de reincidencia.	Artículo 580 En todos los delitos de terrorismo, la condena de un juez o tribunal extranjero será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los efectos de aplicación de la agravante de reincidencia.

ÍNDICE CRONOLÓGICO DE DISPOSICIONES CITADAS

Convención de Ginebra por la Prevención y la Represión del terrorismo del 16 de noviembre de 1937.

Convenio Europeo de 27 de enero de 1977 para la Represión del Terrorismo.

Constitución española de 27 de diciembre de 1978.

Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Resolución 1373 (2001) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4385ª sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001.

Decisión Marco de la Unión Europea 2002/475/JAI del Consejo de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo.

Convenio nº 196 del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, de 16 de mayo de 2005.

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Resolución 2178 (2014) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7272ª sesión, celebrada el 24 de septiembre de 2014.

Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

BUENO ARÚS F. *Principios Generales de la legislación antiterrorista*. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, número 11, Madrid, 1986.

CAMPO MORENO, J.C., *Represión penal del terrorismo. Una visión jurisprudencial*. Ed. Editorial General del Derecho. Valencia 1997

CAMPO MORENO, J.C. *Comentarios a la reforma del Código Penal en materia de terrorismo: La L.O. 2/2015*. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 2015.

CANCIO MELIÁ, M. *Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto*. Ed. Reus, Madrid, 2010.

CANO PAÑOS, M.A. *Estudios sobre el Código Penal reformado. Leyes orgánicas 1/2015 y 2/2015*. Ed. Dykinson. Ed. 1ª, Madrid, 2015.

CAPITA REMEZAL, M. *Análisis de la legislación penal antiterrorista*. Ed. Colex, Madrid, 2008

COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTON, T. *Derecho penal Parte General*, 5ª Edición Tirant lo Blanch. Valencia, 1999.

CUELLO CALÓN, E. *Manual de Derecho Penal. Parte general, tomo I, vol. I*, edición XVIII, ed. Bosch. Actualizada y puesta al día por CAMARGO HERNÁNDEZ, C. Barcelona, 1981

GARCÍA ALBERO, R. *La reforma de los delitos de terrorismo (arts. 572, 573, 574, 575, 576,5 76bis, 577, 578, y 579 CP)*, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), *La Reforma penal de 2010: Análisis y comentarios*, Aranzadi Thomson Reuters., Cizur Menor, Navarra, 2011.

GACÍA PABLOS DE MOLINA, A., *Asociaciones ilícitas en el Código Penal*, Ed. Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1978.

GARCÍA SAN PEDRO, J. *Terrorismo: aspectos criminológicos y legales*, Madrid, 1993. Págs. 215-216

GARCIA VALDÉS, C. *La legislación antiterrorista*. Anuario Derecho Penal y ciencias penales, tomo XXVII, fascículo II, Madrid, 1984

JAÉN VALLEJO, M. y PERRINO PÉREZ, A.L. *La reforma penal de 2015 (Análisis de las principales reformas introducidas en el Código Penal por las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo)*, Ed. Dykinson S.L., Madrid, 2015.

JIMÉNEZ DE ASÚA, L. *Tratado de derecho penal*, Ed. Losada, Buenos Aires, 1963-1965

LAMARCA PÉREZ, C. *Tratamiento jurídico del terrorismo*, Ed. Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Secretaria General Técnica, Madrid, 1985.

LAMARCA PÉREZ, C. *La mediación en detención ilegal: ¿una conducta atípica o justificada?* en «Jueces para la democracia, información y debate» nº 20, Madrid, 1993.

MARTÍNEZ DHIER, ALEJANDRO. *La Legislación Antiterrorista en la historia de nuestro derecho. España y el fenómeno terrorista en los siglos XIX y XX* <http://revistas.um.es/analesderecho/article/view/272871>, Murcia, 2016.

MESTRE DELGADO, E. *Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional*. Ed. Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1987.

MORAL DE LA ROSA, J. *Aspectos penales y criminológicos del terrorismo*. Ed. Centro de Estudios Financieros. Madrid, 2005

MUÑOZ CONDE, F. *Derecho penal Parte especial*, 8ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1990.

MUÑOZ CUESTA, F.J. *Revista Aranzadi Doctrinal* núm. 7/2014 parte Tribuna. Editorial Aranzadi, SA, Cizur Menor. 2014

NÚÑEZ CASTAÑO, E., *Los delitos de colaboración con organizaciones y grupos terroristas*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

TERRADILLOS BASOCO, J. *Terrorismo y derecho*. Tecnos, Madrid, 1988.

RELACIÓN CRONOLÓGICA DE SENTENCIAS ANALIZADAS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

STC 199/1987, de 16 de diciembre de 1987. Recursos de inconstitucionalidad 285 y 292/1985, interpuestos respectivamente por el Parlamento de Cataluña y el Parlamento del País Vasco frente a la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución.

STC 89/1993, de 12 de marzo de 1993. recurso de inconstitucionalidad núm. 1.491/88, promovido por el Parlamento Vasco contra la Ley Orgánica 3/1988, de 25 de mayo, de Reforma del Código Penal.

STC 136/1999 de 20 julio. RTC 1999\136

TRIBUNAL SUPREMO

STS de 26 diciembre 1989. RJ 1989\9780

STS 2/1997, de 29 de noviembre (Sentencia de la Mesa Nacional de Herri Batasuna)

STS 572/2007 de 18 junio. RJ 2007\6281

STS 4587/2008 de 17-07 - ECLI: ES:TS: 2008:4587, N° de Recurso: 10012/2008

STS 480/2009, de 22 de mayo

STS 20/2011 de 1 de junio

STS 234/2012, de 16 de marzo, RJ 2012/5012 (TS anula la absolución de un etarra del intento de secuestro de un concejal socialista.)

STS 659/2012 de 26 de julio, ROJ STS 5970/2012. El Tribunal Supremo absuelve a las recurrentes del delito de colaboración con organización terrorista que habían sido condenadas por la AN al aplicar eximente incompleta.

STS 997/2013 de 19 diciembre. RJ 2013\8479

STS 67/2014 de 14 enero. ROJ: STS 67/2014 - ECLI: ES:TS: 2014:67

STS 754/2014 de 4 noviembre. RJ 2014\5667.

STS 67/2015 de 9 febrero. RJ 2015\667

STS 174/2015 de 14 mayo. RJ 2015\2609

AUDIENCIA NACIONAL

SAN 24/1999, de 24 de junio

SAN 4/2000, de 25 de enero, ROJ 327/2000

SAN 40/2000, de 18 de julio, ROJ 5039/2000

SAN 10/2002, de 11 de mayo, ROJ 8220/2002

SAN 12/2003, de 01 abril, ROJ 458/2003

SAN 29/2005, de 30 de junio, ROJ 8197/2005

SAN 83/2005, de 14 de diciembre, ROJ 5478/2005

SAN 19/2006 Roj: SAN 624/2006 ECLI: ES:AN: 2006:624

SAN 19/2006, sección 3ª, de 21 de marzo

SAN 20/2006, de 9 de mayo, ROJ 6284/2006

SAN 36/2006, de 24 de julio, ROJ 6479/2006

SAN 52/2010 de 3 septiembre. JUR 2011\26024

SAN de 16 de octubre de 2013 ROJ. 4053/2013

DOCUMENTOS UTILIZADOS EN SOPORTE ELECTRÓNICO

[http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2625\(XXV\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2625(XXV)), visitada 16-06-2016

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Resolución 2625 (XXIV), 24 de octubre 1970

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/N1454802_ES.pdf visitada 16-06-2016. Resolución 2178 (2014) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7272ª sesión, celebrada el 24 de septiembre de 2014

<http://www.memorialvt.com/wp-content/uploads/2018/06/Cuaderno05.pdf> (visitada el 9 de enero de 2019)

<https://observatorioterrorismo.com/historia/jose-antonio-pardines-la-primera-victima-mortal-de-eta/>, (visitada 16-01-2019)

<https://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/31/espana/1117527674.html>, (Visitada el 19-01-2019)

<https://www.elimparcial.es/noticia/107935/nacional/historia-de-los-grapo:-asesinatos-secuestros-y-extorsion-.html>, (visitada el 19-01-2019)

<http://www.rtve.es/noticias/20080624/gobierno-vasco-asegura-extrema-derecha-gal-han-matado-66-personas/101671.shtml>, (visitada el 19-01-2019)

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1940/062/A01537-01539.pdf> (Visitada de 21 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1944/204/A05580-05583.pdf> (Visitada de 21 enero de 2019)

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1941/101/A02434-02444.pdf> (Visitada de 21 de enero de 2019).

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1945/013/A00427-00472.pdf> (Visitada de 21enero de 2019)

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1947/126/A02686-02687.pdf> (Visitada de 21 de enero de 2019).

<https://www.boe.es/boe/dias/1960/09/26/pdfs/A13405-13406.pdf> (visitada el 21 de enero de 2019).

<https://www.boe.es/boe/dias/1971/11/16/pdfs/A18414-18415.pdf> (visitada el 21 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/boe/dias/1971/11/16/pdfs/A18415-18419.pdf> (visitada el 21 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-1452> (visitada el 21 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-18072> (visitada el 21 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-1454> (visitada el 21 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/boe/dias/1976/02/19/pdfs/A03445-03445.pdf> (visitada el 22 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-166> (visitada 22 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-167> (visitada el 22 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-168> (visitada el 22 de enero de 2019)

<http://revistas.um.es/analesderecho/article/view/272871> (visitada el 22 de enero de 2019)

<http://www.mpr.gob.es/servicios2/publicaciones/vol17/> (visitada el 22 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-865> (visitada el 22 de enero de 2019)

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-16969 (visitada el 22 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-865> (visitada el 23 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229> (visitada el 23 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-11880> (visitada el 23 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-21629> (visitada el 23 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-25996> (visitada el 23 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-9983> (visitada el 23 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-9953> (visitada el 23 de enero de 2019)

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3440> (visitada el 23 de enero de 2018)